



CUADERNOS DE LA

DIVERSIDAD

CULTURAL



Buenas Prácticas
del MERCOSUR

Diversidad y Derechos Culturales

VOL. IV



RMC
Reunión de
Ministros de
Cultura



**Cuadernos de la diversidad cultural: Buenas prácticas del MERCOSUR:
Diversidad y Derechos Culturales; compilado - 4a edición bilingüe -
Buenos Aires: Ministerio de Cultura de la Nación, 2023.
Libro digital, PDF; Edición bilingüe: español; portugués.
ISBN 978-987-8915-68-5**

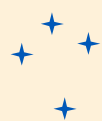


CUADERNOS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

Buenas Prácticas
del MERCOSUR

“Diversidad y Derechos Culturales”
VOL. IV

Edición bilingüe: español-portugués



RMC
Reunión de
Ministros de
Cultura

Créditos

Coordinación General y compilación

Alicia Graciela Agüero

Laura Andrea Arruzazabala

Orlando César Agüero

Traducción

Aurora Zandoná Lubary

Secretaría Técnica del MERCOSUR Cultural

Maximiliano Vera

AGRADECIMIENTOS

A los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR
que participaron de esta Edición: Brasil, Chile,
Paraguay, Uruguay y Argentina.

ES UNA PUBLICACIÓN DE LA COMISIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL DEL MERCOSUR.
PRESIDENCIA PRO-TÉMPORE ARGENTINA 2023.



ÍNDICE

Sección en lengua castellana

Presentación del Ministro de Cultura de la Nación Argentina pág.

ARGENTINA

Las colectividades inmigrantes en Argentina como sujetos de derechos culturales pág.

BRASIL

Diversidad y Derechos Culturales pág.

CHILE

Formación en educación antirracista desde las artes. Un camino para la construcción de ciudadanías interculturales pág.

PARAGUAY

Afrodescendientes: Ley N° 6940 pág.

URUGUAY

¿Refugiados o migrantes económicos? pág.

Seção em língua portuguesa

Apresentação do Ministro de Cultura da Nação Argentina pág.

ARGENTINA

As comunidades de imigrantes na Argentina como sujeitos de direitos culturais pág.

BRASIL

Diversidade e Direitos Culturais pág.

CHILE

Formação em educação antirracista através das artes. Um caminho para a construção da cidadania intercultural pág.

PARAGUAY

Afrodescendentes: Lei n° 6940 pág.

URUGUAY

¿Refugiados ou migrantes econômicos? pág.

Sección lengua castellana

Presentación del Ministro de Cultura de la Nación Argentina

Este año se conmemoran en la región aniversarios históricos de una relevancia trascendental para cada uno de nuestros países. Chile recuerda los cincuenta años del trágico golpe militar que puso fin al gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Por su parte, Argentina celebra un hecho inédito: los cuarenta años de democracia ininterrumpida. Tuvimos que atravesar momentos de profunda oscuridad de los que pudimos salir transformando el dolor en resistencia. Lo hicimos posible por voluntad, convicción y compromiso. Nuestro permanente homenaje a los 30 mil detenidos desaparecidos, a los organismos de Derechos Humanos y, especialmente, a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que tanto lucharon en aquellos tiempos y continúan haciéndolo ahora.

Pero aún tenemos deudas pendientes que hoy, más que nunca, es necesario saldar para fortalecer nuestras democracias y también para construir sociedades más justas e igualitarias para todos y todas. Una de ellas es la de continuar trabajando por alcanzar una profunda defensa de las diversidades de nuestros pueblos, lenguas y culturas. Al igual que alzamos las banderas de los derechos humanos para salir de esos oscuros años, hoy es necesario entender la diversidad como un derecho que debemos defender y proteger. Ambos conceptos están íntimamente vinculados. No puede haber una auténtica inclusión sin reconocimiento, respeto y defensa de la diversidad. En nuestro ámbito es necesario convertir esta defensa en una premisa fundamental, en un derecho cultural insoslayable.

Según la UNESCO, “la diversidad cultural amplía las alternativas, alimenta diferentes capacidades, valores humanos y cosmovisiones, y permite que la sabiduría del pasado nos prepare para el futuro. La diversidad cultural puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, comunidades y países”. Y agrega que es por ello que “se trabaja con una perspectiva en pos y a favor del respeto, protección y conservación de la diversidad de todas las culturas, para el presente y el futuro”.

Estos cuadernos, elaborados cuando Argentina ocupa la Presidencia Pro Tempore del Mercosur Cultural, apuntan en esa dirección, incluyendo problemáticas tan importantes como la historia de la cultura afro, la necesaria formación en educación antirracista, las migraciones, la legislación a favor de la diversidad y de las colectividades inmigrantes, entre muchas otras.

Celebramos, entonces, que nuestra región y cada uno de sus países tomen la diversidad como uno de los pilares fundamentales desde los cuales pensar, elaborar y desarrollar políticas públicas culturales.

Prof. Tristán Bauer
Ministro de Cultura de la Nación

ARGENTINA

**LAS COLECTIVIDADES INMIGRANTES
EN ARGENTINA COMO SUJETOS
DE DERECHOS CULTURALES**



Presidente de la República Argentina

Dr. Alberto Fernández

Vicepresidenta de la República Argentina

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Ministro de Cultura

Profesor Tristán Bauer

Secretario de Gestión Cultural

Federico Prieto

Directora Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria

María Laura Bianchi

Directora de Derechos Humanos en Cultura

María Fabiana Almeida

“Las colectividades inmigrantes en Argentina como sujetos de derechos culturales”

por **Federico Prieto**

En los primeros días del mes de mayo de 2023 desde el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Gestión Cultural a mi cargo, presentamos un programa integral destinado a estimular y potenciar el desarrollo de las actividades de matriz cultural llevadas adelante por colectividades de inmigrantes en Argentina. Lo hacemos en la comprensión de que las mismas son organizaciones que motorizan la participación colectiva y comunitaria, y que reconocemos su centralidad en la revalorización de sus expresiones identitarias, sostenida en armonía con los procesos culturales de otras comunidades, lo que permite amplificar las relaciones e intereses compartidos en el territorio dónde se desarrollan diferentes actores culturales.

Los objetivos que nos propusimos para nuestra gestión dentro del Ministerio de Cultura de la Nación se articulan alrededor de cuatro ejes organizadores de las políticas públicas de cultura: cultura comunitaria, federalismo, diversidad e impacto en los territorios. Las colectividades de inmigrantes son colectivos de matriz cultural que desarrollan actividades y sostienen marcos simbólicos e identitarios que indudablemente se enmarcan en este conjunto de ejes de gestión.

Las migraciones son inherentes a la historia de la humanidad y sin dudas una de las fuentes originales de la riqueza simbólica y material que constituyen aquella diversidad cultural que, como indica la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales aprobada por la UNESCO en 2005, es una característica esencial de la humanidad.

En Argentina, la historia y la cultura lleva la impronta de los caracteres identitarios provenientes de diversos pueblos, su tejido social y su riqueza. Estas colectividades fueron se fueron dando también una identidad nueva en los territorios que habitan -y siguen haciéndolo- en un proceso socio histórico y político nuevo, pues no replican la vida de sus lugares de origen, sino que son partícipes de la vida local portando sus tradiciones, lenguas, prácticas e imaginarios, del mismo y junto a una diversidad de flujos originarios y migratorios, compuestos por po-




blaciones aborígenes, afrodescendientes e inmigrantes de distintos continentes.

Desde mucho antes de la conformación de nuestro Estado Nación, variadas colectividades aportaron a nuestro país un conjunto de puntos de vista propios y representativos de esa diversidad, desde lo social, lo económico, lo político, lo productivo y cultural. Es fundamental recuperar también la memoria de aquellas primeras comunidades migrantes, evitando borrarlas o subsumirlas en una identidad nacional unificada, como ciertas elites quisieron hacer para negar lo diverso, especialmente en el momento de la consolidación del llamado Estado conservador burgués, durante la segunda mitad del siglo XIX.

En ese período, de todos modos, Argentina se posicionó como un lugar históricamente abierto a los movimientos migratorios, aunque la decisión oficial soñaba con las migraciones del hemisferio norte, suponiendo que portaban un universo cultural convergente con las ideas del Estado que las elites pretendían instaurar. Así la Constitución Nacional (art.14) y la Ley Nacional 25.871 reconocen a la migración como un derecho humano, y garantizan que todo extranjero residente en el país goce de los mismos derechos civiles del ciudadano argentino. Esta condición, más allá de los sueños de las elites conservadoras que imaginaron la apertura multicultural de Argentina, facilitó modos de organización, producción y circulación de servicios y bienes culturales que imprimieron en la población un particular modo de vida en todo el territorio nacional.

Nuestra tarea se desarrolla en el presente y no puede soslayar ese sesgo de la historia. La diversidad cultural que portan las comunidades de inmigrantes viene también desde el fondo de nuestra historia y se expresa dinámicamente, fundando a su vez nuevas tradiciones que ya no surgen de prácticas originarias, sino constituidas en el encuentro en este nuevo territorio, con otros migrantes del mismo origen, con migrantes de otras nacionalidades, y con poblaciones afincadas desde tiempos anteriores.

En este sentido, es de vital importancia continuar promoviendo el desarrollo de las organizaciones conformadas en el territorio nacional que representan a las diversas colectividades. Reconocerlas no sólo en su dimensión histórica sino como espacios de encuentro intergeneracional desde donde se concretan iniciativas que abogan por la preservación de sus expresiones culturales y caracterizan la vida de una población o comunidad con permanencia en nuestro territorio.




Este programa se desarrolla bajo estas premisas y actualmente se despliega a través de una convocatoria abierta a las organizaciones de colectividades formalmente constituidas y a municipios de baja cantidad de habitantes, transfiriendo recursos económicos directos para la concreción de distintas actividades que incluyen proyectos ligados a la organización de fiestas u homenajes, a estrategias de comunicación y difusión, proyectos de formación o capacitación dirigidos a los miembros de la colectividad o al público en general, desarrollos de investigación histórica, antropológica o de innovación (dirigidos a la elaboración de plataformas tecnológicas, aplicaciones o desarrollos análogos), trabajos vinculados con la recuperación o preservación del patrimonio cultural de la comunidad, entre distintas propuestas que potencie las actividades de matriz cultural de las comunidades de inmigrantes.

La creación del programa de apoyo a las colectividades de inmigrantes en Argentina tiene antecedentes en mi gestión como director en la Secretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos, de donde soy oriundo.

Una es la sanción de la ley por la cual se instauró el “Día de los/as afroenterrerianos/as y la Cultura afrolitoraleña”, que es un instrumento que permite reconocer la preexistencia de habitantes afro en la provincia, pero por sobre todo tomar conciencia de la importancia de la comunidad afro y a la cultura afrolitoraleña, como parte de nuestra identidad entrerriana. Más allá del hecho simbólico de imponer una fecha para celebrar tal presencia en la historia de nuestra provincia, que se estableció en conmemoración de María Francisca Lencinas, primera afroenterreriana registrada por los documentos escritos conservados en la provincia, la ley promueve acciones positivas para que, mediante políticas públicas, se visibilicen, incluyan y apoyen a la comunidad y cultura afrolitoraleña en sus distintas disciplinas. Estas políticas deben también incorporar enfoques de género.

Apenas unos días después, durante abril de 2021, se sancionó la Ley Provincial 10878 que declara como integrantes del Patrimonio Cultural a las colectividades radicadas en Entre Ríos. La evolución que propone esta legislación es que su texto no solo las comprende, a partir de los diferentes formatos, como asociaciones capaces de realizar actividades, contratar, y ejercer una vida social en función de las reglas que las habilitan, sino que las considera parte del patrimonio cultural provincial. La norma reconoce en este elemento distintivo, su condición de




colectivos de matriz cultural, su rasgo fundamental. En su artículo cuarto, entre otras cosas, la ley da algunos lineamientos que es importante destacar. Las políticas impulsadas por la misma deben dar cuenta del pluralismo, la diversidad y el valor de la multiculturalidad como factor determinante en la identidad provincial, potenciar la participación de los jóvenes de cada colectividad y fomentar encuentros entre las instituciones para la difusión e interrelación de las distintas culturas y colectividades. Esto habla de actores culturales que portan saberes, bienes y tradiciones que son dispositivos simbólicos y materiales vivos, capaces de servir al proceso continuo de consolidación, trasmisión e intercambio al interior de sí mismos, intergeneracionalmente, con otras comunidades migrantes y con el resto de las personas de la provincia y la Nación.

La identidad cultural funciona como un elemento de cohesión dentro de nuestras comunidades, y por ello, se trata de un proceso en permanente construcción. En este sentido, resulta fundamental que las asociaciones que representan a las colectividades desplieguen una serie de acciones, propuestas y programas que posibiliten a sus integrantes sentirse parte de la propia vida de estos repertorios culturales, significativos para las comunidades locales y fuente de transmisión de relatos e historias que se actualizan en las definiciones mismas de cada colectividad.

Los miembros de las colectividades se reúnen y organizan para manifestarse, a los fines de rememorar, mantener, reproducir y difundir sus tradiciones culturales a través de festividades y fiestas populares; a partir de expresiones artísticas como la música, la danza, propuestas pedagógicas de sus lenguas, la enseñanza de sus artesanías y/o gastronomías típicas, prácticas deportivas, y juegos, así como también para representar sus intereses comunes.

El proceso que llevó a la sanción de la ley, sobre todo a la inclusión de una cláusula que establece la inembargabilidad de los inmuebles que pertenecen a cada una de las colectividades, fue producto de un recorrido trazado junto a las organizaciones que las representan, con quienes organizamos reuniones con agenda de diálogo abierto para encontrar cuáles eran las demandas en común y cómo se podían construir líneas de acciones conjuntas, que luego se transformen en programas llevados delante de manera colaborativa entre Estado y las organizaciones, siempre buscando responder a esas necesidades concretas. Luego de ese




camino en común, donde las diferentes colectividades afincadas en los distintos lugares de la provincia participaron, se llegó a esta ley.

Pero este proceso fue fundamental para reconstruir al mismo tiempo el lugar de las colectividades en la comunidad, como centro de procesos identitarios y culturales. Ese recorrido, que fue concreto por todo el territorio provincial, fue clave para reforzar la vinculación de los individuos a cada una de las colectividades, y el sentido de pertenencia, en clave de potenciar los derechos de cada uno de los individuos a la ciudadanía y también impulsar el ejercicio de esa ciudadanía cultural, que de alguna forma implica decir “soy esto”, y poder reclamar los derechos que surgen de esta identidad que es a la vez individual y colectiva. Así se llega a la síntesis que confluye en la elaboración del proyecto de ley.

Tuvo un impacto muy importante en la protección de los bienes de muchas organizaciones. La sanción ocurrió cuando aún atravesábamos la pandemia, cuyos efectos concretos en la posibilidad de contar con recursos económicos para las organizaciones fue devastador. Por eso la ley opera por un lado visibilizando los recorridos de las organizaciones que representan a las colectividades, para reforzar esa presencia como sujetos de derecho con nombre propio, y no solamente como parte de una abstracción vacía englobada bajo el concepto de ciudadanía. La inembargabilidad decretada en la ley repercute en el resguardo de los bienes inmuebles que pertenecen a las colectividades, como centros culturales capaces de difundir, potenciar y desarrollar las culturas y sus diversidades. Esos bienes que en muchos casos podrían haberse perdido, fruto de la crisis desatada por la pandemia de Covid-19, fueron protegidos por esta ley. Para ello pueda sostenerse legalmente es fundamental el reconocimiento que hace la provincia de estas asociaciones como actores multiculturales, sujetos colectivos de diferentes vertientes que confluyen en un territorio específico.

En nuestra provincia había antecedentes no jurídicos de este reconocimiento a las colectividades, sobre todo por el desarrollo turístico y gastronómico, teniendo en cuenta que se han creado circuitos de las colonias judías, de las colonias alemanas del Volga, y también las fiestas populares que representan a cada una de estas colectividades, sean patronales, relacionados a algún aniversario, o incluso algún método productivo simbólico que las representa. También es muy importante entender que la diversidad cultural por la cual Entre Ríos está histórica-



mente atravesada, ya que en nuestra provincia se instaló la primera colonia judía de Latinoamérica, que es Basavilbaso, o la primera colonia italiana de Argentina en Chajarí. También contamos con una gran comunidad franco suiza que fundó San José, o la colectividad luxemburguesa, que es la más grande de toda Argentina. La Ley sin dudas articula el derecho positivo a través de la protección de los bienes destinados a las actividades comunitarias y culturales, como también institucionaliza estos diferentes procesos que constituyeron nuestra historia y nuestra identidad y que se articularon a través de instalación de polos productivos, el desarrollo de la cultura local y la atracción del turismo.

Las políticas públicas deben ser un dispositivo que procure canalizar los procesos de la cultura comunitaria en los territorios a favor de las demandas y las necesidades en cada lugar y en cada momento, priorizando la diversidad, la no discriminación, y comprendiendo la centralidad de los derechos culturales como parte de los derechos humanos, sin un rango menor a otros enunciados en la declaración universal de los mismos.

Por ese motivo desde el Ministerio de Cultura de Argentina se impulsa un modelo de gestión federal que promueva el desarrollo local en todo el país de forma justa y equitativa, con base en el territorio como ámbito de construcción y transformación de relaciones sociales y culturales. Desde esa diversidad de identidades, y garantizando el derecho de acceso a escala federal, se busca construir nacionalidad que, a diferencia de lo que intentaron las elites gobernantes en la segunda mitad del siglo XIX, comprenda a todos y a todas, sin diluir sus particularidades locales.

Bibliografía

Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales UNESCO. París, 2005

Constitución de la Nación Argentina, 1994

Ley Nacional N° 25871/2004 (Ley de Migraciones), 2004

Ley Provincial N° 10884. Entre Ríos (Argentina), 2021

BRASIL

DIVERSIDAD Y DERECHOS CULTURALES





Presidente de la República

Luiz Inácio Lula da Silva

Ministra de Cultura

Margareth Menezes

Secretaria de Cidadanía y Diversidad Cultural

Márcia Rollemberg

Director de la Política Nacional de Cultura Viva

João Pontes

**Directora Sustituta de Promoción de las
Culturas Populares**

Sandra Cipriano Chaves

Director Sustituto de Promoción de la Diversidad Cultural

Neuran Pereira da Silva

**Jefe del Despacho de la Secretaría de Cidadanía
y Diversidad Cultural**

Allison da Silva Pereira

**Coordinadora General de la Política Nacional de
Cultura Viva**


Iara da Costa Zannon

Colaboradores

Giselle Dupin

Tiã Soares

Rodrigo Dias



El diálogo sobre la diversidad y los derechos culturales implica establecer una relación entre el individuo y su contexto de vida, su comunidad, su memoria, su identidad y su sentido de pertenencia. La cultura está intrínsecamente ligada al ejercicio de la ciudadanía y, en Brasil, es un derecho constitucional respaldado por preceptos internacionales. En ese sentido, este artículo destaca la importancia de los derechos culturales para la diversidad de la sociedad brasileña, que es un patrimonio invaluable de su historia y formación. Además, el artículo destaca las dificultades que enfrenta el sector cultural frente a la pandemia del Covid-19 y expone las acciones del Ministerio de Cultura de Brasil para preservar derechos y rescatar la cadena económica del sector cultural, a través de tres importantes marcos: la Ley Aldir Blanc 1, en 2020, y la Ley Paulo Gustavo y Aldir Blanc 2, en 2022. La secuencia actual de prioridades para 2023-2026, con la reanudación del Ministerio de Cultura y la regulación y ampliación de apoyo, promoción y las acciones de valorización de los agentes culturales, juegan un papel crucial en la preservación y renovación de las expresiones culturales brasileñas, en la capacidad de diálogo intercultural en favor de la diversidad global, con un impacto real en la economía creativa y en la promoción del ejercicio y disfrute de los derechos culturales en nuestro territorio.

Margareth Menezes
Ministra de Cultura de Brasil

Marcos legales que estructuran la cultura y la diversidad cultural en Brasil

Brasil, por su formación histórica, tiene la diversidad como marca de su sociedad. Los pueblos indígenas, ocupantes originales del territorio, que hablaban diferentes idiomas, fueron desplazados tierra adentro gradualmente a medida que los conquistadores y colonizadores europeos avanzaban a lo largo de la costa y establecían el dominio portugués. Al mismo tiempo, millones de africanos de distintas naciones, con diferentes formas de organización social, idioma y cultura, fueron llevados a la esclavitud para apoyar la economía colonial. La combinación de estas distintas matrices culturales dio origen al pueblo brasileño, que se caracteriza por la diversidad cultural presente en las artes, cocina, tradiciones, valores y costumbres. Esta diversidad es una característica fundamental y estructurante de la sociedad brasileña.

Los derechos culturales son fundamentales para que todas las personas puedan expresar y disfrutar libremente su cultura, sin ningún tipo de restricción o discriminación. La Constitución Federal Brasileña de 1988 reconoce y valora la diversidad cultural, garantizando en sus artículos 215, 216 y 216 A, la promoción y preservación del patrimonio cultural brasileño en todas sus manifestaciones. Dichos artículos constitucionales representan importantes y esenciales avances en la garantía de los derechos culturales. Es obligación de los gobiernos federal, estatal, distrital y municipal valorar, difundir, conservar, proteger y promover los bienes, el patrimonio material e inmaterial, las prácticas y los conocimientos histórico-culturales y artísticos a nivel nacional, regional y local, como se destaca a continuación:

“(…)

Art. 215. El Estado garantizará a todas las personas el pleno ejercicio de los derechos culturales y el acceso a las fuentes de la cultura nacional, y apoyará y fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales.

1º El Estado protegerá las manifestaciones de las culturas populares, indígenas y afrobrasileñas, y las de otros grupos participantes del proceso civilizatorio nacional.

2.º La ley preverá la fijación de fechas conmemorativas de alta significación para los

distintos segmentos étnicos nacionales.

3º La ley establecerá el Plan Nacional de Cultura, de duración plurianual, visando el desarrollo cultural del País y la integración de las acciones del poder público que conduzcan a:

I defensa y valorización del patrimonio cultural brasileño;

II producción, promoción y difusión de bienes culturales;

III formación de personal calificado para la gestión de la cultura en sus múltiples dimensiones;

IV democratización del acceso a los bienes culturales;

V valorización de la diversidad étnica y regional.

(...)

Art. 216. El patrimonio cultural brasileño está constituido por bienes de naturaleza material e inmaterial, tomados individualmente o en conjunto, que hacen referencia a la identidad, acción, memoria de los diferentes grupos que forman la sociedad brasileña, que incluyen:

I - formas de expresión;

II - las formas de crear, hacer y vivir;

III - creaciones científicas, artísticas y tecnológicas;

IV - obras, objetos, documentos, edificios y otros espacios destinados a manifestaciones artísticas y culturales;

V - conjuntos urbanos y sitios de valor histórico, paisajístico, artístico (...)"

Es importante recalcar que la promoción de los derechos culturales no está restringida al Estado. Cada individuo y los más diversos movimientos sociales organizados en la sociedad tienen responsabilidad social, que se expresa en el artículo 216 A de la Constitución Federal de Brasil, a continuación:

Art. 216-A. El Sistema Nacional de Cultura, organizado de manera colaborativa, descentralizada y participativa, instituye un proceso de gestión y promoción conjunta de políticas públicas culturales, democráticas y permanentes, consensuadas entre las entidades de la Federación y la sociedad, con el objetivo de promover desarrollo humano, social y económico con pleno ejercicio de los derechos culturales.

La cultura es reconocida como un elemento esencial de la identidad y expresión de las personas en otros marcos jurídicos internacionales importantes, de los que Brasil también es signatario, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y la Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976). Además de estos, también se encuadra en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2001) y la Declaración de Friburgo (2007) que cubren aspectos de los derechos culturales, incluido el pluralismo cultural, las dimensiones simbólica, cultural y económica de la cultura.

En agosto de 2007, Brasil promulgó a través del Decreto N° 6.177, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, que fue firmada en París durante la 33ª Reunión de la Conferencia General de la UNESCO, el 20 de octubre de 2005. Esta Convención destaca la diversidad cultural como un factor esencial para la humanidad, nutriendo las capacidades y valores humanos e impulsando el desarrollo sostenible de las comunidades, pueblos y naciones. En la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible MONDIACULT, en septiembre de 2022, la comunidad internacional en el área de la cultura expresó su compromiso de “promover un ambiente propicio para el respeto y ejercicio de todos los derechos humanos, en particular los derechos -individuales y colectivos en todos los dominios de la cultura”, incluido el entorno digital. El objetivo es construir un mundo más justo y equitativo, reduciendo las desigualdades, especialmente para grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, niños, pueblos indígenas, afrodescendientes, LGBT-QIAP+ y personas con discapacidad.

Todos los marcos legales mencionados y la incorporación de la diversidad y los derechos culturales en la Constitución brasileña de 1988 como componentes estructurales y estructurantes fueron fundamentales para que, incluso en momentos históricos difíciles -como el reciente ataque a la democracia, la pluralidad y las identidades culturales, la profunda crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia del COVID-19, y la resistencia del conjunto de movimientos culturales, artísticos, colectivos y grupos sociales de culturas populares, comunidades tradicionales de origen africano, **quilombolas**, comunidades ribereñas, naciones indígenas, segmentos LGBTQIAP+ , mujeres, personas con discapacidad, entre otros-, el país contó con la movilización y el apoyo legal para garantizar derechos y evitar mayores retrocesos.

Uno de los frutos fundamentales que generó este movimiento de articulación cultural, junto al Congreso Nacional, en momentos tan adversos, fue precisamente la creación e implementación de las Leyes: Aldir Blanc 01 n° 14.017/ 2020; Paulo Gustavo, oficializada como Ley Complementaria n° 195/2022; y Aldir Blanc 02 n° 14.399/ 2022.

Las leyes de fomento: Aldir Blanc, Paulo Gustavo y el rescate de la cultura brasileña en tiempos de crisis

En Brasil, los derechos culturales se materializan efectivamente en el “borde”, es decir, en las ciudades, pueblos y provincias, en la vida de cada persona y de las instituciones y colectivos culturales, a través de la implementación de políticas públicas que involucran el patrimonio cultural, el patrimonio cultural inmaterial y la memoria artística y cultural del país. Estas políticas deben apoyar la producción, difusión, consumo y disfrute de los bienes y servicios culturales, así como el desarrollo individual y colectivo a través de acciones de formación cultural en las escuelas, prácticas y actividades comunitarias, barrios y territorios.

Los derechos culturales también están integrados con el desarrollo económico. La cultura y el arte, además de constituir un bien individual y colectivo de una sociedad, son responsables en Brasil por la generación de cerca de cinco millones de empleos directos, representando más del 5% de la bolsa de trabajo del país y moviendo casi el 4% de la Producto Interno Bruto (PIB) brasileño. La construcción y ejecución de políticas públicas para impulsar este importante sistema es gestionado por el Estado a través del Sistema Nacional de Cultura, en construcción, que tiene como objetivo articular las entidades federativas para la democratización de las políticas públicas culturales en todo el territorio nacional, un modelo de gestión con enfoque sistémico para garantizar la cultura y la diversidad cultural como un derecho, previsto en la Constitución Federal.

Este importante sistema de la economía creativa y cultural del país sufrió un duro golpe con la crisis sanitaria mundial, una de las mayores catástrofes de las últimas décadas. La pandemia del Covid-19 paralizó al mundo en todos los aspectos, principalmente porque generó un cambio en la ruta del motor del capitalismo con el estancamiento de la economía y la cadena económica de la cultura fue una de las más afectadas siendo la primera en cerrar sus puertas y una de las últimas en poder volver con sus actividades.

Los trabajadores de esta cadena enfrentaron profundos desafíos, que ya eran anteriores a la crisis sanitaria, como el alto nivel de informalidad, la mayoría de los cuales eran trabajadores por cuenta propia sin derechos laborales ni de seguridad social asegurados, contratos temporales y proyectos de corto plazo. La can-

relación de actividades culturales, encuentros, eventos, espectáculos, conciertos, presentaciones, formaciones, intercambio de conocimientos, en consonancia con la fragilidad de la protección de derechos en la que viven estos profesionales, tuvo un impacto fatal en el sector que necesitaba una respuesta rápida de los poderes de la República para buscar satisfacer las necesidades de este sistema.

Fue en este contexto que surgió la Ley Aldir Blanc 1/2020, que puede ser considerada, además de un marco legal importante, una buena práctica que Brasil ha desarrollado para garantizar el derecho y la diversidad cultural. Movidos por la sociedad civil organizada y los agentes culturales, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con la aprobación de esta ley, tomaron medidas de emergencia para apoyar a los sectores artístico y cultural con recursos para garantizar los ingresos y la supervivencia de los trabajadores culturales, con la continuidad de las actividades de los sectores artístico, cultural y de la economía creativa, de los espacios culturales, con el fomento de la creación de nuevos contenidos y producciones culturales, incluido el entorno digital.

Los recursos se ejecutaron de manera descentralizada, a través de la transferencia de la Unión a los Estados, Municipios y el Distrito Federal para que estos los distribuyan a los trabajadores de la cultura, proceso que se desencadena a través de un sistema que permite el seguimiento y control de los recursos públicos. La inversión sin precedentes fue de 3 mil millones de reales, transferidos a todos los estados de la federación y al 75% de los municipios del país. Cuando consideramos la inmensidad de Brasil, con 5.568 municipios, más el Distrito Federal, con territorios de diferentes tamaños, realidades, geografías y distribuciones poblacionales y socioeconómicas, la implementación de esta ley es un hito histórico, por el volumen de recursos y porque involucra múltiples instancias de decisión y carpetas ministeriales, además de contactos permanentes con gobiernos estatales y municipales.

Los datos hasta finales de 2021 ya nos traen la posibilidad de medir el impacto de la ayuda de emergencia en la cultura brasileña:

- Los municipios recibieron 1,38 mil millones de reales, de los 1,5 mil millones puestos a disposición por el Gobierno Federal, beneficiando a 4.176 municipios, lo que representa el 75% del total.

- Los 26 estados brasileños y el Distrito Federal recibieron el 100% de los fondos asignados, totalizando aproximadamente R \$1,6 mil millones de reales, incluyendo la transferencia de fondos no solicitados por algunos municipios, a través de un proceso de reversión.
- Se realizaron alrededor de 4.000 avisos públicos, convocatorias públicas y premios en todo Brasil, que abarcan la producción cultural, el apoyo a los artistas y diversos espacios culturales, así como **Pontos y Pontões de Cultura** que trabajan con actividades culturales comunitarias y expresan la matriz de la diversidad cultural en el territorio, el llamado Brasil profundo.
- En total, alrededor de 2,68 millones de trabajadores culturales se beneficiaron de la ayuda de emergencia mensual, además de 25 mil pequeñas empresas culturales, instituciones y organizaciones culturales comunitarias que recibieron el subsidio mensual para el mantenimiento de sus espacios.

A partir de los datos presentados, podemos reafirmar la importancia fundamental de la Ley Aldir Blanc 1/2020, en el rescate del sector cultural brasileño en este contexto de profunda crisis. La ley aseguró la garantía de los derechos culturales, proporcionando un ingreso mínimo para los trabajadores culturales, apoyando los espacios culturales y promoviendo la producción cultural. Además de contribuir a la preservación del patrimonio material e inmaterial, estimular la creación y circulación de nuevos contenidos, así como el desarrollo social de los profesionales dedicados a la cultura y las artes. Tampoco podemos dejar de destacar el impacto positivo en la economía local, estatal y nacional.

Sin embargo, la Ley seguía siendo insuficiente para la reanudación completa del sector cultural y para solventar los pasivos económicos heredados por la pandemia y los retrocesos vividos en la política pública de cultura. Así, en 2022, con amplio apoyo y movilización de la sociedad civil, fueron creadas la Ley Paulo Gustavo y la Ley Aldir Blanc 2, que tienen como objetivo el respeto a la diversidad, la democratización y el acceso universal a la cultura, con inversiones, respectivamente, en el orden de 3.800 millones de reales y 3.000 millones de reales anuales a partir de 2023. Aún en un contexto adverso, que obligó al entonces Gobierno Federal a vetar estas leyes, en ese momento, la sociedad civil organizada, con

mucha movilización y en consonancia con el Congreso Nacional, logró anular estos vetos y garantizar que estas leyes fundamentales entraran en vigor.

La Ley nº 14.399/2022, conocida como Aldir Blanc 2/2023, tendrá una duración de cinco años y la Unión transferirá anualmente recursos para ser aplicados en avisos públicos y convocatorias públicas de promoción del Sector Cultural, como una forma de apoyo descentralizado al arte y la cultura con un corte específico de R\$ 600.000,00 por año exclusivamente para la Política Nacional de Cultura Viva (Ley 13.018/2014), que promoverá la red de **Pontos y Pontões de Cultura**, hoy con aproximadamente 4.500 puntos certificados. El proceso de regulación de esta legislación es para 2023, y ya está en marcha en el Ministerio de Cultura.

A su vez, la Ley Complementaria (LC) nº 195/2022, conocida como Ley Paulo Gustavo - así nombrada en honor a un gran artista cómico, muy querido por el público brasileño, víctima de la Covid-19 en mayo de 2021- fue reglamentada el 11 de mayo de 2023 por el Presidente de la República Luiz Inácio Lula da Silva. Esto permite liberar 3.800 millones de reales del Fondo Sectorial Audiovisual, sector que recibirá el 70% de los recursos, y otras fuentes vinculadas al Fondo Nacional de Cultura.

De esa manera, los municipios, estados y el Distrito Federal podrán invertir en la producción de una variedad de manifestaciones culturales y artísticas, incluyendo también la música, la danza, la pintura, la escultura, el cine, la fotografía y las artes digitales. Para acceder a los recursos, las entidades federativas deberán elaborar y presentar planes de acción, los cuales serán analizados por el Ministerio de Cultura. La transferencia de recursos a los agentes culturales se realizará a través de avisos públicos, convocatorias públicas, premios, adquisición de bienes y servicios relacionados con el sector cultural, u otras formas de selección pública y democrática.

Cabe mencionar que en ambas legislaciones encontramos como lineamientos estructurales la importancia de la diversidad cultural y la democratización de la cultura, tal como lo establece la Ley Aldir Blanc 2, que en su artículo tercero trata los principios de esta política nacional:

Art. 3 Los principios de la Política Nacional de Fomento de la Cultura de Aldir Blanc son:

- II - universalidad en el cumplimiento de las áreas de actuación previstas en esta Ley;
- III - descentralización de los recursos de que trata esta Ley;
- IV - respeto a la diversidad cultural;
- V - gestión democrática y compartida de los poderes públicos entre sí y entre ellos y la sociedad civil;

La idea también está presente en el artículo 17 de la Ley Paulo Gustavo:

Art. 17. En la implementación de las acciones previstas en esta Ley Complementaria, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios deberán asegurar mecanismos para fomentar la participación y el protagonismo de las mujeres, los negros, los pueblos indígenas, los pueblos tradicionales, incluidos los **terreiros** y **quilombolas**, las poblaciones nómadas, las personas del segmento LGB-TQIA+, las personas con discapacidad y otras minorías, a través de cuotas, distintos criterios de puntuación, avisos públicos específicos o cualquier otro medio de acción afirmativa que garantice la participación y protagonismo de estos colectivos, observando la realidad local, la organización social del colectivo, en su caso, y la legislación relacionada con la materia.

Cabe señalar que el sector cultural está compuesto por una amplia variedad de segmentos artísticos, profesionales, trabajadores culturales y otros involucrados directa o indirectamente en actividades artísticas y culturales. Esto incluye desde agentes culturales y hacedores que llevan a cabo la acción cultural, hasta costureras, productoras, vigilantes, escenógrafos, maquilladores, camarógrafos, asistentes, iluminadores y muchos otros profesionales que participan en los arreglos productivos de la cultura. Además, los espacios y equipamientos culturales, como salas, teatros, bibliotecas, organizaciones, instituciones y colectivos culturales, también forman parte activa e integral de este sector.

Podemos decir que las leyes aquí tratadas, así como la reanudación del Ministerio de Cultura en este nuevo gobierno, con su centralidad como inductor y articulador de las políticas culturales a nivel nacional, han sido fundamentales para estimular la revitalización de la política cultural, recuperar empleos, asistir en el mantenimiento de proyectos, fomentar actividades creativas y de economía solidaria, además de apoyar el mantenimiento de espacios artísticos y culturales, microempresarios individuales, microempresas y pequeñas empresas culturales, asociaciones, cooperativas, instituciones y organizaciones culturales comunitarias. Estas inversiones contribuyen a mantener viva la producción cultural

brasileña, su diversidad de manifestaciones, ampliando el acceso a los derechos culturales.

La ejecución de estos mecanismos jurídicos que protegen la diversidad cultural, los derechos de todas las personas que trabajan y hacen cultura, y la democratización del acceso a los bienes y medios, debe ser un proceso constante, pues impulsa el crecimiento sostenible de un sector vital para la preservación de la identidad y el patrimonio cultural brasileño, elementos que nos definen como pueblo y nación.

La implementación de las Leyes antes mencionadas tendrá un impacto significativo en el sector cultural, permitiendo que la economía creativa cumpla con su rol relevante como vector esencial para el desarrollo económico y social del país.

Nuestra pluralidad cultural debe ser apropiada y valorada como un bien de desarrollo, ampliando nuestra capacidad de diálogo intercultural a favor de la diversidad global y el pleno ejercicio de los derechos culturales en nuestro territorio, en la región y en el mundo. Al fin y al cabo, respetar la diversidad cultural es garantizar la dignidad humana y promover la cultura es contribuir a la construcción de un planeta más feliz, más justo, más creativo e innovador.

Bibliografía

Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, MONDIACULT, 2022.

Constitución de la República Federativa de Brasil, 1988.

Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, UNESCO. París, octubre de 2005

Declaración de Friburgo, 2007.

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.

Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, 2001.

Ley Aldir Blanc N° 14.017, 2020

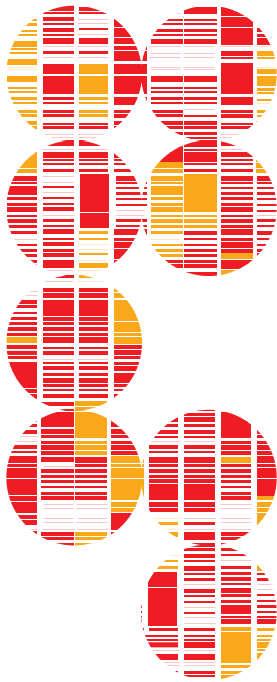
Ley Aldir Blanc 2 N° 14399, 2022

Ley Paulo Gustavo N° 195, 2022

Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, 1976.

CHILE

**FORMACIÓN EN EDUCACIÓN
ANTIRRACISTA DESDE LAS ARTES.
UN CAMINO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE CIUDADANÍAS INTERCULTURALES**



Presidente de la República

Gabriel Boric Font

Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Jaime de Aguirre Höffa

Subsecretaria de las Culturas y las Artes

Andrea Gutiérrez Vásquez

Jefe de Asuntos Internacionales

Nicolás del Valle Orellana

Jefa Departamento Ciudadanía Cultural

Marianela Riquelme Aguilar

Presentación

El desarrollo cultural es una condición transversal para el fortalecimiento de territorios y comunidades en el Cono Sur, como también para la promoción de una convivencia social basada en dignidad, justicia y solidaridad.

En este sentido, la diversidad cultural es un pilar fundamental de la vida social de nuestro país y -al mismo tiempo- un horizonte democrático que tiene como objetivo garantizar el pleno ejercicio a la identidad, diversidad y diferencia de los pueblos y comunidades, colocando en el centro una participación activa en la vida artística y cultural.

La democracia cultural se constituye para nuestro país como un paradigma y línea de trabajo de largo aliento, que implica reconocer y observar las históricas condiciones de desigualdad que han marcado la vida cultural de los territorios, para así transformar los modos e idear mecanismos que permitan corregir dichas condiciones.

Y una de las principales herramientas para lograr dicha transformación es la instalación de la perspectiva intercultural de manera transversal en las políticas culturales, desafío que implica la valoración, rescate y reconocimiento de la diversidad cultural en defensa de la democracia, la integración y la cooperación.

Cuando los pueblos dialogan, significa que hay comunidades que se fortalecen, acercándonos a un pacto entre culturas y sociedades, ratificando con ello nuestro ferviente compromiso con la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales.

Para lograr este objetivo, transversalizar la perspectiva intercultural en las políticas culturales, es necesario avanzar en la educación antirracista, aportando a la construcción de una ciudadanía intercultural con el propósito de proteger y promover la diversidad de expresiones interculturales.

Jaime de Aguirre Höffa
Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

FORMACIÓN EN EDUCACIÓN ANTIRRACISTA DESDE LAS ARTES. UN CAMINO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍAS INTERCULTURALES

Autora

Natascha Diharce Böser
Profesional Programa Interculturalidad e Inclusión de Migrantes

Colaboración

Rocío Errazquin Díez
Coordinadora de Asuntos Multilaterales

Hugo Provoste Valdebenito
Periodista Unidad de Contenidos y Difusión del Departamento
Ciudadanía Cultural

Introducción

En el marco de la promoción y protección de la diversidad de expresiones culturales, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se ha centrado en la visibilización de manifestaciones artísticas y culturales de comunidades migrantes, contribuyendo así a crear estrategias de inclusión y espacios de encuentro entre la población migrante y la chilena. No obstante, parece relevante diseñar líneas de trabajo para enfrentar las causas estructurales de los procesos de exclusión, como el racismo; y en ese lugar se sitúa la propuesta de formación en Educación Antirracista, elaborada entre el Departamento Ciudadanía Cultural y el Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura.

El Tercer Informe Periódico Cuadrienal del Estado de Chile de la Convención sobre la Promoción y la Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales (Unesco, 2005)¹, presenta ciertos desafíos en esta materia, entre los que se destaca la necesidad de “avanzar en temas de inclusión hacia las comunidades migrantes para reducir los prejuicios generados respecto de las diferencias” (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2020, pág. 144). Precisamente, hablar de inclusión implica la revisión y superación de determinadas barreras,

¹ Quadrennial Periodic Report Chile 2020: <https://es.unesco.org/creativity/governance/periodic-reports/submission/6629>. Fecha de consulta 12 de diciembre de 2022.

como son los prejuicios y estereotipos, que pueden ser abordadas tanto desde la difusión de prácticas artísticas y culturales de artistas y comunidades migrantes, como desde la reflexión con la ciudadanía en general.

A este respecto, Tubino plantea que “las políticas de inclusión de la diversidad – léase acciones afirmativas – deben ser complementadas con políticas de convivencia intercultural o de **interculturalidad para todos** que fomenten la construcción de ciudadanía intercultural tanto en los discriminados como en los discriminadores” (s.f., pág. 2). Por una parte, se trata de distribuir recursos para la gestión de iniciativas propias de comunidades de personas migrantes; y, por otra, de promover acciones con la sociedad receptora para erradicar cualquier forma de discriminación hacia estos grupos culturales. Todo esto, con el propósito que la “interculturalidad permee a la sociedad en su conjunto a fin de desarrollar en todos y todas competencias interculturales en relación a la diversidad” (Loncón Antileo, Castillo Sánchez, & Soto Cárcamo, 2016, pág. 67).

Desde esta perspectiva, avanzar hacia la construcción de ciudadanía intercultural implica desarrollar competencias interculturales, entendidas como actitudes, conocimientos y habilidades para convivir en el reconocimiento constante de la diversidad cultural y de este modo transformar las inequidades en oportunidades para todos los grupos culturales. En esta misma línea, y así como lo sugieren las orientaciones del Tercer Informe Periódico Cuadrienal del Estado de Chile de la Convención sobre la Promoción y la Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales (Unesco, 2005), resulta imperativo “promover la interculturalidad en la ciudadanía con énfasis en el trabajo que se realiza en espacios educativos formales y no formales” (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2020, pág. 154).

Educación Artística y enfoque intercultural

Desde el Mincap² se ha propuesto comenzar la implementación de un trabajo que vincule el enfoque intercultural con comunidades migrantes y agentes de la educación. Esto se tradujo en un proyecto piloto que involucró la participación de artistas-pedagogas/os, docentes y una artista afrocolombiana, con la finalidad

2 Mincap: abreviatura para referirse al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, de Chile.

de reflexionar sobre el racismo y profundizar en la instalación de la perspectiva intercultural en contextos educativos.

Es así como, se propuso una articulación entre dos programas de esta Institución: el programa Fomento del Arte en la Educación -ACCIONA- y el programa Interculturalidad e Inclusión de Migrantes. ACCIONA es un programa de Educación Artística, implementado en establecimientos educacionales de todo Chile, y cuyo propósito es “aumentar la participación activa de estudiantes en procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la cultura y las artes y así fortalecer sus capacidades socio afectivas, desarrollar su creatividad y valorar su patrimonio cultural local”³. Una de sus principales características es la promoción de diversos enfoques, entre los que destaca el de interculturalidad. Y por su parte, el programa de Interculturalidad e Inclusión de Migrantes, que busca “acortar la brecha de participación cultural de las personas migrantes a partir de una estrategia que visibilice sus expresividades artísticas y manifestaciones y sensibilizar a la población chilena a las expresiones artísticas migrantes”⁴.

Esta iniciativa se realizó en el marco de los compromisos establecidos en el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, definiéndola de la siguiente manera: “sensibilización y formación en enfoque intercultural con docentes, artistas/ educadores/as, mediadores/as de espacios culturales y organizaciones culturales comunitarias para el diseño y ejecución de proyectos artístico-culturales que promuevan la igualdad y no discriminación de comunidades migrantes”. Esto, asociado al Eje de Igualdad, en el capítulo de Personas migrantes y refugiadas y niños, niñas y adolescentes, cuya meta es “promover la igualdad y prevenir la discriminación arbitraria de personas de grupos de especial protección, adoptando medidas que contribuyan al establecimiento de una cultura de respeto por los derechos humanos en el ámbito público y privado”.

Capacitación en educación antirracista

Los principales objetivos de las jornadas de capacitación fueron: Entregar herramientas pedagógicas antirracistas a educadoras/es y artistas para la enseñanza en las escuelas chilenas a través de las artes y la cultura como eje transversal

3 <https://www.cultura.gob.cl/educacion-artistica/acciona/#:~:text=El%20prop%C3%B3sito%20general%20del%20programa,valorar%20su%20patrimonio%20cultural%20local.>

4 Orientaciones Programáticas 2022 - Programa Interculturalidad e Inclusión de Migrantes.

de aprendizaje, con la finalidad de analizar de manera crítica la instalación del racismo en educación, cultura y arte. Comprender la relación entre educación y arte en el proceso de enseñanza-aprendizaje para pensar el quehacer pedagógico desde parámetros no occidentales. Reconocer los procesos artísticos de personas migrantes, afrodescendientes y mapuche que se han dado en los territorios.

Una de las principales características de este trabajo es que las jornadas de capacitación fueron coordinadas por el Programa ACCIONA y el Programa Interculturalidad e Inclusión de Migrantes y diseñadas, ejecutadas y evaluadas por Julieth Micolta, mujer afro-bogotana y migrante residente en Chile hace siete años, creadora del proyecto educativo antirracista Bemba Colorá⁵, educadora popular y estudiante de Sociología. Julieth, en su tránsito migratorio, ha investigado sobre el racismo en la educación y ha desarrollado un trabajo con niños y niñas afrodescendientes y migrantes. Asimismo, ha realizado diversas propuestas educativas interculturales que apuntan hacia una conciencia antirracista y el rescate por la memoria afro-diaspórica en contextos educativos.

Metodología

Las sesiones se desarrollaron de manera virtual para lograr mayor participación de diversas comunidades. En términos metodológicos, se utilizaron estrategias de aprendizaje participativo, donde primó la experiencia de las y los participantes en el área de educación artística. Asimismo, se combinaron elementos de gamificación⁶ a través de las aplicaciones online como Padlet y Kahoot, que permiten construir saberes colectivos, diálogos y encuentros, así como revisar hallazgos de las sesiones anteriores.

Participantes de las sesiones de capacitación

Los seis módulos de capacitación fueron divididos por regiones definidas como prioritarias en el país. De este modo, el primer bloque de capacitaciones contó con la participación de docentes y artistas-educadoras/es residentes en las re-

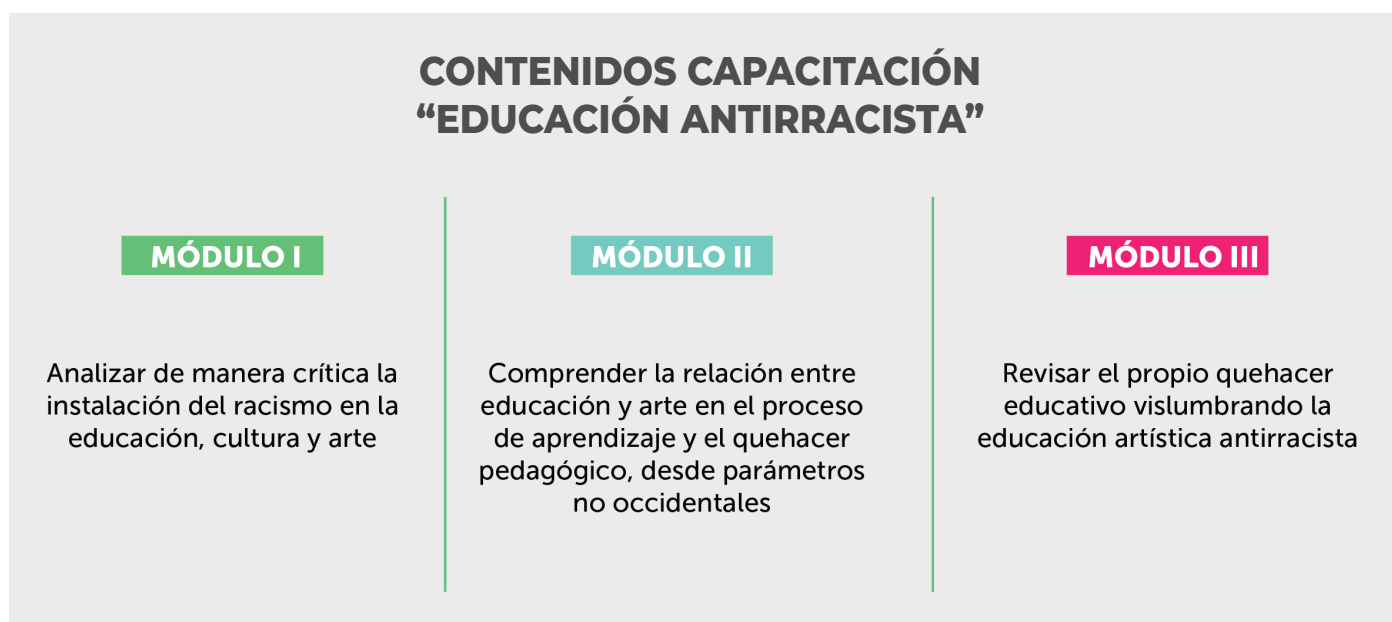
5 Proyecto Bemba Colorá: <https://bemba.cl/>

6 Gamificación: La Gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos. <https://www.educativa.com/blog-articulos/gamificacion-el-aprendizaje-divertido/>

giones de Arica y Parinacota, Región de Tarapacá y Región de Antofagasta. Y en el segundo bloque, participantes de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Contenidos de las capacitaciones

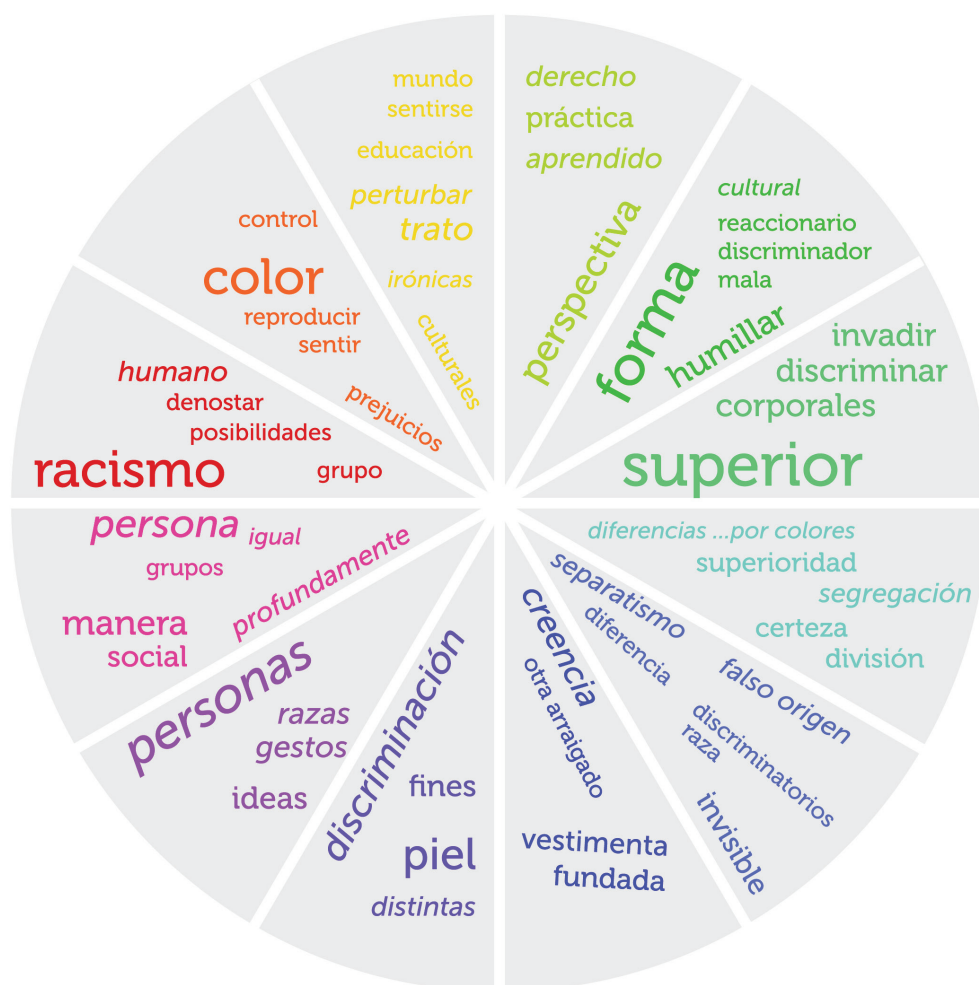
En cuanto a las temáticas abordados, estas se dividieron en tres módulos:



Módulo I: Racismo en educación, cultura y arte.

Esta unidad tuvo por objetivo analizar de manera crítica la instalación del racismo en los ámbitos de educación, cultura y artes, enfatizando en la relevancia de identificar actitudes racistas en contextos educativos, que pueden surgir mediante la negación del racismo y la folclorización. A continuación, se comparten algunas ideas asociadas al racismo extraídas de las sesiones de formación.

Tabla 1 “Algunas ideas asociadas al racismo” (Elaboración propia)



Para Riedemann y Stefoni, el racismo se reconoce como “cualquier expresión verbal o acción en la que se manifieste la creencia de que es válida la clasificación de los seres humanos en razas” (2015, pág. 195). Por lo tanto, la invitación es a ampliar la mirada hacia las diversas formas en que se manifiesta. Precisamente, respecto de esto es importante señalar que emergió la negación del racismo como uno de los principales obstáculos para su erradicación. En palabras de Van Dijk, “una de las principales características del racismo es su negación, que puede ser típicamente ilustrada en expresiones como “no tengo nada en contra de los negros, pero...” (1992, pág. 87), lo que refleja que el reconocimiento de discursos que niegan el racismo es el punto de partida para generar un acercamiento a una educación antirracista.

Por otra parte, es común identificar prácticas educativas con tendencias folclorizantes, donde se invita a estudiantes de diversas nacionalidades a exponer en ferias escolares o festividades, algún elemento portador de identidad de sus comunidades. En este sentido, Romero (2016), define la folclorización como “un dispositivo que activa la enajenación de las representaciones y las prácticas desconectándolas de sus historias y procesos locales, produciendo su fragmentación, su discriminación y la selección de algunas, muy pocas, para **envolverlas** con otra estética hasta convertirlas en mercadería” (pág. 19). Y por este motivo, es imprescindible acompañar esos procesos pedagógicos con reflexiones en la comunidad educativa, que permitan comprender los contextos desde donde provienen dichas prácticas artísticas y/o culturales.

Módulo II: Educación antirracista I

El propósito de este módulo fue comprender las oportunidades que emergen entre la educación y las artes en los procesos de aprendizaje, desde una mirada intercultural. Y para abordar esta temática se contó con la participación de dos artistas: Ülcha Huelchumil⁷, educadora, artista y filósofa de la pedagogía mapuche; y Sara Dorado, artista migrante colombiana, dedicada a trabajar desde las artes visuales en establecimientos educacionales en la ciudad de Viña del Mar. En esta sesión, se indagó en los conceptos asociados a la educación antirracista y al aporte de las artes para su abordaje.

En este contexto, se definió la educación antirracista como “una iniciativa pedagógica orientada a transmitir conocimientos y habilidades para combatir el racismo, la xenofobia y la violencia” (Riedemann & Stefoni, 2015, pág. 197). Y desde esta perspectiva, los diversos lenguajes artísticos representan una herramienta específica para instalar reflexiones e indagar en formas para transformar las desigualdades reinantes en contextos educativos. En definitiva, las artes facilitan la expresión de diversas experiencias, visiones, e identidades, individuales y colectivas. En palabras de López-Ganet (2021), “las personas necesitamos expresarnos y acercarnos al resto de historias también a través de las emociones. Las artes son un espacio de trabajo idóneo para ello, siempre y cuando se entiendan de forma abierta, flexible, heterogénea y realmente diversa” (págs. 95-96). De este modo, las invitadas propusieron algunas herramientas esenciales para la

7 Ülcha Huelchumil: <https://bemba.cl/acerca-de/>

construcción de una educación artística antirracista:

- Debe ser un proceso anticolonial
- Debe tener la voz migrante
- Es necesario conectar con lo interior
- Las emociones son parte del entramado antirracista
- El antirracismo también trabaja con la justicia
- Las conversaciones abiertas son vitales para la construcción de una memoria colectiva y significativa.⁸

Módulo III: Educación antirracista II

Una vez revisados algunos contenidos vinculados con el racismo, y el aporte de las artes para su abordaje, durante la última jornada se propuso una instancia de reflexión en torno al propio quehacer artístico-pedagógico de las personas participantes, y a partir de ello, se elaboraron algunas propuestas de educación antirracista para ser aplicadas en el ámbito de la educación artística.


8 Propuestas de artistas invitadas a las capacitaciones: Ülcha Huelchumil y Sara Dorado.

Tabla 2: Propuestas de educación artística antirracista

ÁREA ARTÍSTICA	¿QUÉ HERRAMIENTAS VINCULADAS A LA EDUCACIÓN ANTIRRACISTA PUEDO IMPLEMENTAR EN MI QUEHACER ARTÍSTICO EDUCATIVO?	¿CÓMO LAS IMPLEMENTO?	¿PARA QUÉ?
Dibujo / Artes plásticas	Incorporación de diferentes formas de cuerpos, pieles, cabellos	Llevar referentes artísticos diversos; lápices para pintar de diferentes colores. Explicar que no hay un "color piel" e integrar diálogo de la diversidad de pieles	Para que las niñas puedan reconocer en su aprendizaje diferentes formas físicas, así se pueden reconocer en ellas y reconocer en sus pares
Cine y audiovisual	Visionado de artistas de diversas culturas, youtubers y cine latinoamericano	Crear videos con intereses de estudiantes	Promover la multiculturalidad y la diversidad de expresiones artísticas
Teatro	Ampliar las referencias artístico-culturales del campo de la representación teatral	Traer referentes directoras/es, dramaturgas/os desde otros pueblos	Reconocer la existencia de otras formas de representación teatral provenientes de diversas comunidades culturales
Asignatura de Lenguaje	Conocer nuevas corporalidades tradicionales, cuentos, leyendas	Recopilar diversos textos de diferentes pueblos, lugares, presentando su relación entre los pueblos y sus historias	Reconocer diferencias y similitudes en las tradiciones e historias de diversos pueblos

Conclusiones

Uno de los principales hallazgos durante el proceso de formación en educación antirracista ha sido que, para lograr el desarrollo de competencias interculturales en educación artística, es preciso identificar las creencias, actitudes, conocimientos y referencias culturales de cada persona que trabaja en contextos artísticos y educativos, ya que podrían estar deslegitimando experiencias y sentires de diversas/os estudiantes y sus contextos culturales. Desde este punto de vista es necesario promover la reflexividad y la discusión crítica al interior de los establecimientos educativos respecto a la diversidad cultural presente para liderar propuestas conjuntas que favorezcan el reconocimiento de las subjetividades y el desarrollo pleno de los estudiantes como sujetos de derecho (Tijoux, 2016, pág. 279).



En consecuencia, desde el Mincap se vislumbra la necesidad de continuar desarrollando una línea de trabajo en los ámbitos de educación e interculturalidad, que cuente con la participación de artistas, pedagogas/os, docentes, mediadoras/es y gestoras/es culturales, quienes trabajan con niñas y niños y personas pertenecientes a grupos culturales históricamente discriminados.

Como hemos visto, la formación en antirracismo y competencias interculturales es un punto de partida en la construcción de ciudadanías que reconozcan la diversidad cultural y, que debe tomar relevancia en el contexto de las Políticas Culturales, enmarcadas en la democracia cultural, instalando para ello un nuevo desafío: transitar desde la noción de ciudadanía cultural hacia la idea de ciudadanías interculturales.

Finalmente, a partir de la experiencia compartida en este cuaderno, parece prioritario consolidar la instalación de la perspectiva intercultural en el marco de diversos programas sociales, que articulan las culturas, las artes y la educación, con el propósito de “transversalizar el apoyo y acompañamiento a las comunidades de inmigrantes y pueblos originarios como un componente en todas las iniciativas programáticas de las políticas culturales” (Tijoux, 2016, págs. 274-275).

Referencias

Loncón Antileo, E., Castillo Sánchez, S., & Soto Cárcamo, J. (2016). Barreras a la Interculturalidad en el sistema educativo chileno. Informe final. Encargado por UNICEF y MINEDUC. Santiago.

López-Ganet, T. (2021). Transformando la educación desde el antirracismo, los feminismos negros y la comunidad afro por medio de las artes. *Observar. Revista Electrónica De Didáctica De Las Artes*, 84-103.

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. (2020). Tercer Informe Periódico Cuadrienal del Estado de Chile - Convención para la promoción y protección de la diversidad de expresiones culturales, UNESCO 2005.

Riedemann, A., & Stefoni, C. (2015). Sobre el racismo, su negación, y las consecuencias para una educación antirracista en la enseñanza secundaria en Chile. *Polis, Revista Latinoamericana*, 191-216.

Romero, J. (2016). De la extirpación a la folklorización: a propósito del continuum colonial en el siglo XXI. *Estudios Artísticos: revista de investigación creadora*, 14-36.

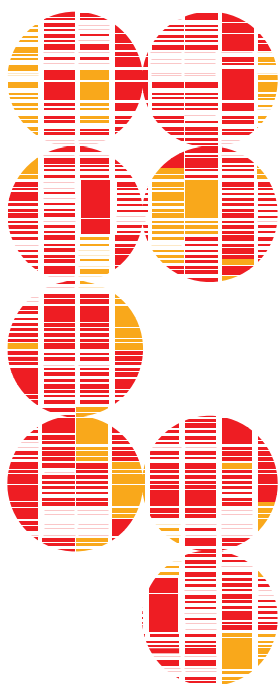
Tijoux, M. E. (2016). *Racismo en Chile. La piel como marca de la inmigración*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria S.A.

Tubino, F. (s.f.). Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Recuperado el 12 de diciembre de 2022, de <https://red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/090714.pdf>

Van Dijk, T. (1992). Discourse and the denial of racism. *Discourse & Society*, 87-118.

PARAGUAY

AFRODESCENDIENTES: LEY N° 6940



Presidencia de la Nación

Mario Abdo Benítez, Presidente

Ministro de Cultura

Rubén Capdevila Yampey

Dirección General de Gabinete

Juan Marcelo Cuenca

Dirección de Cooperación Internacional

Teresita Silvero

Dirección General de Patrimonio

Maricarmen Couchonal

**Dirección General de Planificación,
Desarrollo e Innovación Cultural**

Emilia Esquivel

Dirección General de Comunicación Estratégica

Gustavo Reinoso

Dirección General de Asesoría Jurídica

Nathalia Cardozo

**Dirección General de Diversidad,
Derechos y Procesos Culturales**

Humberto López La Bella

**Dirección de Formación y Divulgación
de la Diversidad Cultural**

Mariela Muñoz Barresi

**Departamento de Expresión, Actividades,
Bienes y Servicios Culturales**


Fátima Báez

Equipo Técnico de trabajo

María Luz Saldívar

Fátima Báez

Nadia Riveros



Como Secretaría Nacional de Cultura somos conscientes de la manera en que las políticas y marco legal específicos contribuyen a la consecución de los derechos culturales, la tolerancia y respeto por la diversidad.

En pos de la protección de los derechos culturales de las personas afrodescendientes del Paraguay, desde finales de 2018 realizamos un proceso de trabajo con la comunidad Afrodescendientes y organismos internacionales.

Resultado de esta sinergia es la Ley 6940/2022 *Que establece mecanismos y procedimientos para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación hacia las personas afrodescendientes*. Legitimando así su visión de mundo y protegiendo su desarrollo y expresión como tal.

Creemos firmemente que el crecimiento y fortalecimiento de la cultura en su diversidad es el camino hacia el éxito de las naciones.

**Rubén Capdevila Yampey, Ministro Secretario
Secretaria Nacional de Cultura de Paraguay**

AFRODESCENDIENTES: LEY N° 6940


por **Ignacio Telesca**

El 20 de julio del año 2022 fue un día muy especial para la comunidad afrodescendiente en el Paraguay y para toda la sociedad en su conjunto. Se aprobó la Ley 6940 “que establece mecanismos y procedimientos para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación hacia las personas afrodescendientes”. No fue fácil, el resultado positivo se logró tras décadas de luchas y a partir de un fortalecimiento mutuo entre las organizaciones afroparaguayas, la Secretaría Nacional de Cultura, organismos internacionales y personas de la sociedad civil. Gracias a esta Ley, se brindan nuevos derechos para una población históricamente invisibilizada y discriminada.

Como en el resto del continente americano, los primeros africanos esclavizados llegaron al Paraguay con los conquistadores, ya en el siglo XVI. No era la paraguayana una economía esclavista sino una sociedad con población esclavizada. Eran los indígenas quienes sufrían en primer lugar las consecuencias del trabajo duro, fundamentalmente en los yerbales. La persona esclavizada constituía una inversión, mientras que los indígenas se recibían casi gratuitamente a través del sistema de encomiendas. A pesar de esto, hasta la abolición de la esclavitud en 1870, nunca la población afrodescendiente bajó del 11% y la esclavizada del 4% de la población total.

Un dato particular de los primeros tiempos de la historia colonial, es que el Paraguay nunca fue un destino en sí mismo por parte de los conquistadores, sino una base para llegar al famoso El Dorado, que no era otra cosa que las minas de plata de Potosí. Cuando finalmente pudieron llegar atravesando la región del Chaco se toparon con que habían llegado primero los limeños, por los que, los provenientes de Asunción, dieron la vuelta y regresaron a su base.

Paraguay, económicamente, no tenía una riqueza mineral importante, sólo poseía la mano de obra indígena, la cual se comenzó a repartir en forma de encomienda a partir de 1556. Muchos conquistadores no recibieron ni indígenas ni tierras, por eso comenzó un éxodo de población hacia los distintos puntos



cardinales, dando lugar a la fundación de nuevos asentamientos, como el caso de Buenos Aires en 1580.

Tampoco llegaron nuevos contingentes de conquistadores europeos a playas asuncenas, por lo que se inició un proceso de mestizaje extendido. Si al inicio de la conquista el mestizaje se produjo como fruto de la violencia física y sexual de los conquistadores con las indígenas guaraníes, ya entrado el siglo XVI y en especial en el siglo siguiente el mestizaje era la moneda corriente al punto que la corona española legitimó al mestizo como español para que pudiera tener todas las prerrogativas de este último. Es así como los censos coloniales no registran la categoría 'mestizo'.


La tradición historiográfica observa este mestizaje entre europeos e indígenas, sin embargo, las fuentes dejan claro que la población afro participaba también de esta simbiosis poblacional. El mestizo paraguayo, entonces, tenía en sus venas las sangres de tres continentes y a medida que el siglo progresaba llegaban más personas provenientes de África que de Europa, por lo que, sin temor a equivocarnos, ya en el siglo XVIII la participación africana era cada vez más importante.

Ser esclavo en América y en el Paraguay, implicaba todo tipo de discriminación, desde el mismo hecho de la ausencia de libertad. Al considerarse como una cosa en la mano de su amo, la violencia sufrida por la población afro fue severa.

En el Paraguay se dio, sin embargo, un hecho particular y es que los principales dueños de personas esclavizadas eran las órdenes religiosas y la iglesia misma, la mitad de la población esclavizada pertenecía a instituciones eclesiásticas y en el momento de la expulsión de los jesuitas, en 1767, estos poseían en su colegio y estancias un cuarto de esta población, en total, 1005 esclavizados.

Se tiende a pensar que el clero trataría mejor a la población esclavizada y las fuentes documentales nos invitan a pensar que así era, puesto que los esclavos tenían sus propios espacios de sociabilidad, como las cofradías religiosas, o su posibilidad de hacerse con cierto pecunio, ya que se les permitía, en ciertos casos, trabajar su propia tierra.

De hecho, cuando tras la expulsión de los jesuitas comenzaron a subastar los



esclavos que poseía la orden, muchos se negaban a cambiar de amos y hubo una revuelta de ochenta y cinco en total, liderada por quienes entre ellos poseían una profesión determinada, eran músicos. Como sea, no dejaban de ser esclavizados y estar sujetos a las mismas discriminaciones que el resto que padecía su misma situación.

Con el correr de los años, muchos de ellos fueron ganando su libertad y conformando una sociedad de afrodescendientes libres. Sin embargo, la corona española los cargó con la obligación de pagar un tributo, que en la mayoría de los casos era imposible de pagar, por lo que tuvieron que ampararse en quien pudiera pagar por ellos el impuesto. Al decir del célebre Félix de Azara a fines del siglo XVIII, este amparo no era otra cosa que una esclavitud encubierta.

Pero en Paraguay se dio un hecho sin precedente en otras regiones de América. El gobierno creó, en 1741, con esta población afrodescendiente libre, un pueblo, Emboscada, que como su nombre lo indica tenía la función de ser antemural contra las entradas de la población indígena chaqueña. Emboscada persiste hasta nuestros días y es el lugar con mayor presencia afrodescendiente en el Paraguay.

La independencia en 1811 no trajo mayores cambios para esta población afrodescendiente, fuera esclavizada o libre. Recién en 1842 se aprobó la Libertad de vientres por la cual los hijos e hijas de mujeres esclavizadas que nacieran a partir del 1 de enero 1843 serían considerados como libertos y tendrían que servir a sus amos hasta cumplir 24 años, las mujeres y 25 los varones.

Desgraciadamente, la Guerra contra la triple alianza que enfrentó al Paraguay contra Brasil, Argentina y Uruguay (1864- 1870) les llegó primero que la carta de libertad. En esta misma guerra existieron dos batallones conformados por población afro. Tras la guerra, el Paraguay tuvo que reconstruirse y se dio una nueva Constitución en 1870 donde, en el artículo 25, se abolió definitivamente la esclavitud.

Pareciera que también la memoria de la misma existencia de la población afrodescendiente, discriminada hasta 1870, fue invisibilizada en los relatos históricos e identitarios, hasta el punto que cuando se celebró el centenario de la independencia en 1911 el Álbum Gráfico que se editó para dicha conmemoración no dudaba en

afirmar que “el pigmento negro no ensombrece nuestra piel”. En el mestizaje ya no participaba la sangre africana y el ‘negro’ era sólo un dato decorativo en el relato historiográfico, dejando en el olvido que según en el censo de 1799 más del 50% de la población que vivía en Asunción era afrodescendiente. Lo mismo que ocurría en otros países, se repetía sin cesar que “en Paraguay no hubo negros”.


Hacia la visibilización de lo afro, fue en la comunidad de Kamba Kua, durante la década del 60 del siglo XX, que un grupo de afrodescendientes comenzó su lucha por el reconocimiento. Todo comenzó por la lucha por la tierra y luego hicieron su aparición pública la música y la danza. Lo que a los ojos de la población se presentaba como algo exótico y pintoresco era claramente una lucha política por la identidad, por el reconocimiento.

Un acercamiento con la organización Mundo Afro de Uruguay, participaciones en congresos internacionales y el crecimiento del interés de la comunidad, hicieron que la organización creciera y fuera tomada en cuenta por el Estado y por los organismos internacionales.

En el año 2006 realizaron, juntamente con la organización de Emboscada, el primer censo de población afrodescendientes del Paraguay. Un mensaje claro: no somos pocos, acá estamos. El censo no sólo contaba a las personas sino que recogía también datos sobre salud y educación. Claramente el censo fue el puntapié inicial, el disparador, de la lucha por una ley específica que reconociera a la población afrodescendiente como sujeto de derechos.

El lento proceso hacia la Ley 6940

El primer logro de la Comunidad Afroparaguaya fue la aprobación de la Ley 5464 del 2013 que declara “el día 23 de septiembre de cada año como día de la cultura afroparaguaya”. Parece poco, pero fue un paso fundamental, desde el Estado mismo se reconocía la existencia del colectivo afro con una cultura específica digna de ser celebrada. Las organizaciones tenían claro que era un primer paso hacia una Ley específica y lograron armar un proyecto de ley que fue presentado a fines del 2019 por el senador Blas Llano. El proyecto tenía un título breve pero concreto: “que reconoce a la población afroparaguaya como una minoría étnica”.



Luego se fue ampliando para que ya en el mismo título apareciera todo lo que se quería solicitar: “que reconoce a la población afrodescendiente del Paraguay como una minoría étnica e incorpora el legado de las comunidades afrodescendientes en la historia, su participación y aportes en la conformación de la nación, en sus diversas expresiones culturales (arte, filosofía, saberes, costumbres, tradiciones y valores)”.

Desgraciadamente, el acápite de la Ley, resultó estrecho y atendió sólo a uno de los reclamos de las organizaciones: “que establece mecanismos y procedimientos para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación hacia las personas afrodescendientes”. No fue éste el único cambio, sino que se sacó de la redacción final lo referente a la creación de un plan de salud para las comunidades afroparaguayas así como la propuesta de promover el acceso de las personas afroparaguayas y afrodescendientes a los organismos de la administración pública. Finalmente, se aprobó la nueva redacción en la Cámara de Senadores, que hace foco fundamentalmente en los actos de discriminación, el 20 de julio de 2021.

Se tenía la esperanza de que, en la otra Cámara, de Diputados, se pudiera reincorporar lo excluido, pero no fue así. En octubre de ese mismo año se rechazó el proyecto y volvió a la Cámara de origen. Ante esta circunstancia o se ratificaba el proyecto enviado por Senadores o se iniciaba todo el proceso de nuevo. Las organizaciones priorizaron la aprobación de la Ley aunque no contuviese todo lo pedido. Así fue, se ratificó una vez más en la Cámara de Senadores en marzo del 2022. En la Cámara de Diputados nunca se volvió a tratar, sino que se ratificó por vencimiento de los plazos. De esta manera, el presidente Mario Abdo Benítez puso su firma el 20 de julio del mismo año apareciendo ese mismo día en la Gaceta Oficial N° 140.

Un camino nuevo que recorrer, la experiencia atravesada en el Parlamento, fue para las organizaciones un llamado de atención, nada sería fácil. La comprobación se tuvo casi de inmediato. La boleta censal para el censo 2022 borró de un plumazo la pregunta sobre la autoidentificación afro, pregunta que sí había estado presente en la boleta censal del 2012. Las razones esgrimidas fueron múltiples, pero lo que se vislumbra es que aún falta penetrar todos los estamentos de la administración pública.



Igualmente, las organizaciones no se desanimaron y ya tienen presentado un proyecto de reglamentación de la Ley 6940/2022 que está en proceso de aprobación por parte de la Asesoría Jurídica de la Presidencia. Se abre un nuevo escenario jurídico y de legitimidad para las comunidades afrodescendientes en el Paraguay. Los pasos que se han dado son muy importantes y aunque el camino no será sencillo de recorrer, sabemos que no hay vuelta atrás. La sinergia creada con las instituciones estatales, internacionales y parte de la sociedad civil permitirá afianzar el conseguido y luchar por más derechos.

Las imágenes presentadas a continuación corresponden a la Muestra “**Los invisibles, pardos, negros, mulatas. La esclavitud en Paraguay**”. Archivo Nacional de Asunción, Paraguay.



Bibliografía

Argüello, María (1999), *El rol de los esclavos negros en el Paraguay*. Asunción, Centro Editorial Paraguayo

Boccia Romañach, Alfredo (2004), *Esclavitud en el Paraguay. Vida cotidiana del esclavo en las Indias Meridionales*, Asunción, Servilibro.

Bodin, Capucine (2006), “Esclaves, pardos et milices au Paraguay XVIIe-XIXe siècles” (Stella Sandro y Bernand Carmen, *D’esclave à soldat. Miliciens et soldats d’origine servile, XIIIe-XXe siècle*, Paris, L’Harmattan, pp. 341-364)


Cooney, Jerry (1994), “La abolición de la esclavitud en el Paraguay”, en Jerry Cooney y Thomas Whigham (comp.) *El Paraguay bajo los López. Algunos ensayos de historia social y política*, Asunción, CPES, pp. 25-38

Cooney, Jerry (1995) “El afroparaguayo”, en Luz Martínez Montiel (coord.), *Presencia africana en Sudamérica, México*, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pp. 449-525)

Medina, Nancy y José Carlos Medina (2009), “Una deuda histórica en la construcción de la ciudadanía paraguaya. La afirmación de los derechos de afrodescendientes en el Paraguay”, *Codehupy, Derechos Humanos en Paraguay 2009*, Asunción, Codehupy, pp. 221-227.

Pla, Josefina (1972), *Hermano Negro. La esclavitud en el Paraguay*, Madrid, Paraninfo.

Telesca, Ignacio (2007), “Afrodescendientes en el Paraguay. Invisibilidad, mestizaje y la narración de la historia nacional” (*Estudios Paraguayos*, XXV: 1-2, pp. 77-86)



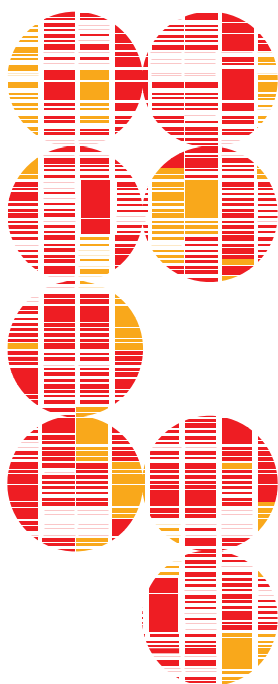
Telesca, Ignacio (2010), “Sociedad y afrodescendientes en el proceso de independencia del Paraguay”, en MALLO, Silvia e TELESKA, Ignacio –editores– “Negros de la patria”. Los afrodescendientes en las luchas por la independencia en el antiguo Virreinato del Río de la Plata, SB, Buenos Aires, pp. 149-170.

Telesca, Ignacio (2020), “Afrodescendientes: esclavos y libros”, en Ignacio Telesca (coord.), Nueva Historia del Paraguay, Buenos Aires, Sudamericana, pp. 399-418.

Williams, John Hoyt (1974), “Esclavos y pobladores: observaciones sobre la historia parda del Paraguay en el siglo XIX”, Revista Paraguaya de Sociología, 31, pp. 7-27.

URUGUAY

¿REFUGIADOS O MIGRANTES
ECONÓMICOS? LOS VENEZOLANOS
EN URUGUAY ANTES Y DURANTE
LA EMERGENCIA SANITARIA



Presidente de la República Oriental del Uruguay

Luis Lacalle Pou

Ministro de Relaciones Exteriores

Francisco Bustillo

**Representante permanente de Uruguay
ante el MERCOSUR**

Enrique Ribeiro

Ministro de Educación y Cultura

Pablo da Silveira

Subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura

Ana Ribeiro

Directora Nacional de Cultura

Mariana Wainstein

Directora de Cooperación Internacional y Proyectos


Agustina Cabrera

**Coordinador del Departamento de Internacionalización
de la cultura uruguaya**

Facundo de Almeida

**Coordinación del MERCOSUR Cultural para
la República Oriental del Uruguay**


Victoria Contartese



Uruguay ha sido desde siempre un país de inmigración. De hecho, en algunas épocas tuvo una de las tasas de inmigrantes sobre el total de población más altas que se conocen. Pero el tema no es solo de carácter cuantitativo. En realidad, eso es lo que menos importa. Lo verdaderamente valioso, lo que constituye un motivo de sano orgullo entre los uruguayos, es que esa inmensa corriente se incorporó a la convivencia social sin grandes traumas ni conflictos. En Uruguay nunca existieron guetos, ni violencia étnica organizada, ni discriminación lingüística o religiosa. Quienes llegaron desde otras tierras, se incorporaron pacíficamente a nuestro modo de vida y en poco tiempo se sintieron parte de la sociedad que los había recibido. En este doble sentido, cuantitativo y cualitativo, el caso de la inmigración en Uruguay es un caso de éxito a escala global. No somos los únicos en el Mercosur en poder sentir este legítimo orgullo.

Como ocurría hace 100 ó 150 años, Uruguay vuelve a ser un país de recepción de inmigrantes. Quienes llegan en estos tiempos (principalmente venezolanos y cubanos) lo hacen por las mismas razones que impulsaron a los inmigrantes de otras épocas: buscan oportunidades y libertad. Felizmente, Uruguay sigue ofreciendo ambas cosas. Nuestra legislación favorable a la inmigración, nuestra economía en crecimiento, nuestra educación pública, nuestro sistema de protección social y el carácter hospitalario de nuestra población crean las condiciones para progresar mediante el esfuerzo y el ejercicio de la responsabilidad personal. Nuestro sistema político, estable y civilizado, ofrece democracia, seguridad jurídica, tolerancia y libertades a quienes no las encuentran en sus países de origen.

Es frecuente que los inmigrantes expresen su gratitud hacia el país que los acoge. Pero nosotros también nos sentimos agradecidos hacia ellos. Cada inmigrante que llega,



lo hace cargado con su historia personal y familiar, con sus valores, con su cultura, con el dinamismo que aportan sus ganas de mejorar. Todo eso nos ayuda a tener una sociedad más rica, más diversa, más viva. Desde sus orígenes hasta hoy, la sociedad uruguaya es una mejor sociedad gracias a quienes llegan para incorporarse a nuestra convivencia. Todos son muy bienvenidos.

Dr. Pablo da Silveira
Ministro de Educación y Cultura

¿Refugiados o migrantes económicos? Los venezolanos en Uruguay antes y durante la emergencia sanitaria

por **Silvia Facal**

Introducción

Desde mediados de la década de 1960 hasta el año 2008 inclusive Uruguay presentó, de forma constante, saldos migratorios negativos. Esta situación se revierte a partir de 2009 con un importante retorno de uruguayos residentes en el extranjero y también gracias a la llegada de nuevos contingentes migratorios procedentes de países no tradicionales de la región como Perú, Paraguay, República Dominicana y, de forma más reciente, Cuba y Venezuela. La mayoría de estos nuevos migrantes se vieron impulsados a escoger nuestro país por motivos principalmente de índole económico. Sin embargo, otros, como los venezolanos, lo hicieron también por motivos políticos siendo considerados por organismo internacionales como la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) como refugiados en el más estricto sentido de la palabra.

Desde 2013 hasta principios de 2020, momento en el cual se decretó la emergencia sanitaria en Uruguay⁹, se ha incrementado, de forma constante, la llegada de venezolanos al país. Esto se atribuye a factores como la política migratoria uruguaya plasmada en la ley 18.250 de 2008 de migración y la 19.254 de 2014 de residencias Mercosur. Ambas normas han facilitado la llegada de migrantes y su rápida inserción principalmente si estos son ciudadanos de países del Mercosur como en el caso de los venezolanos.

Este movimiento migratorio de carácter regional se ha venido produciendo en el marco del actual mundo globalizado en donde se producen situaciones no sólo de desajuste del sistema capitalista sino también situaciones de persecución, de diversa índole.

9 La fecha exacta fue el 13 de marzo de 2020.

Desarrollo

Para poder comprender las dimensiones actuales del proceso migratorio venezolano en Uruguay se hace necesario presentar sus perfiles sociodemográficos y laborales enmarcados en las siguientes variables: año de llegada, destino, género, edad, nivel de estudios e inclusión laboral.

Fecha de llegada y destino

De acuerdo con cifras de la OIM y teniendo en cuenta también los registros del ACNUR, en el último informe publicado en abril de 2021, 5,642,960 venezolanos se encontraban residiendo fuera de su país¹⁰.

En Uruguay, hasta 2012, inclusive, los venezolanos pasaron prácticamente desapercibidos en la estadística oficial uruguaya según se puede apreciar en la siguiente tabla.

Tabla 1. Saldos migratorios venezolanos en Uruguay (2012-2020)

Año de ingreso	Diferencia entre ingresos y egresos venezolanos
2012	177
2013	1.007
2014	1.274
2015	2.258
2016	2.758
2017	2.691
2018	3.847
2019	2.872
2020 ¹¹	1.547
Total	18.431

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la DNM, 2021.

10 Esta cifra representaba la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos informada por los diversos gobiernos anfitriones. No se trata de una cifra exacta, sino que incluye un grado de estimación. Como muchas de las fuentes de los gobiernos no toman en cuenta a venezolanos sin un estatus migratorio regular, es probable que el número total sea más elevado (ACNUR 2021).

11 Todo hacía prever que, durante 2020, a causa de la pandemia del Covid-19, y del cierre de fronteras decretada en los países de la región del cual no ha escapado Uruguay, se produciría una fuerte desaceleración en la entrada de venezolanos al país. No obstante, durante el pasado año 1.547 venezolanos (DNM, 2021) solicitaron residencia en Uruguay. Esta cifra fue sólo superada por la de los 6.811 argentinos que hicieron lo propio (DNM, 2021).



A partir de 2013, comenzó a producirse una llegada de cierta relevancia de venezolanos y, de forma especial, a la capital, Montevideo, donde se centralizan los medios de producción económica del país y también donde realizan los trámites de residencia Mercosur según lo establecido en la ley 19.254 de 2014, junto con la denominada zona metropolitana.¹² La citada ley 19.254, complementaria de la 18.250 de 2008 de “Migración”, tiene como objetivo facilitar la residencia permanente en el país a extranjeros que sean cónyuges, concubinos con trámites judiciales realizados en Uruguay, padres y/o hermanos de nacionales uruguayos y a los nacionales de los Estados Parte y Asociados del Mercosur (Junta Nacional de Migración, 2020).

Diversas son las causas que operan en la llegada de venezolanos al país. Destacan, además de las causas económicas, la situación política y de gran inestabilidad social vivida en Venezuela luego de producirse la muerte de Hugo Chávez, el 5 de marzo de 2013, y el ascenso de Nicolás Maduro al poder. Hasta 2008, inclusive, Venezuela vivió un período de bonanza económica la cual llegó a su fin a partir de 2009, debido a los problemas financieros atravesados por el país (Páez, 2015). Desde ese momento empezó a producirse un incremento de la conflictividad social y de la violencia, seguida de fuertes represalias contra los opositores al gobierno (Castillo Crasto y Reguant Álvarez 2017), la cual se recrudeció con la muerte de Hugo Chávez y sumergió al país en una profunda crisis económica acompañada de una gran tensión social y política.

Género y edad

Para conocer acerca de la distribución por género, desde el punto binario de masculino y femenino, de los migrantes venezolanos en Uruguay nos valemos de los resultados de las Encuestas Continuas de Hogares (ECH) realizadas cada año

¹² Se observa también, aunque en menor medida, una concentración de venezolanos en los departamentos de Maldonado y Canelones. Este último es el departamento vecino a Montevideo y cuenta con infraestructura similar a la de la capital y varias de sus localidades funcionan como zonas dormitorios de Montevideo o como epicentros laborales. En cuanto a Maldonado, es un departamento con una gran atracción de turistas nacionales e internacionales, por poseer playas de reconocida fama internacional, demandantes de mano de obra para el sector servicios y en concreto del turismo. Igualmente, aunque en menor medida, residen venezolanos en otros departamentos, como San José, que también forma parte de la zona metropolitana de Montevideo; Lavalleja, cercano a Maldonado y Canelones; y Rivera, frontera con Brasil, y una de las principales puertas de ingreso de los migrantes venezolanos principalmente durante el transcurso de la pandemia de Covid-19; Salto y Colonia, frontera con Argentina, otra importante puerta de entrada de venezolanos y migrantes de otros orígenes; Soriano, vecino de Canelones; y Treinta y Tres, limítrofe con Lavalleja.



por el Instituto Nacional de Estadística (INE), analizadas para este estudio, y de la encuesta realizada entre 2018 y 2020 desde la Cátedra Magallanes de la Universidad Católica del Uruguay¹³. De acuerdo con los datos provenientes de ambas encuestas, existe un predominio de migración femenina para el caso venezolano. Las mujeres representan el 56% del total de los migrantes venezolanos en Uruguay. Se puede hablar entonces de un fuerte componente de feminización de este contingente migratorio.

En cuanto a la distribución por edades existe un predominio de personas comprendidas en las edades activas laboralmente y principalmente entre los 26 y 35 años, en donde es mayor, y entre 36 y 45 años (ECH 2012-2019; Encuesta realizada para a investigación de la Cátedra Magallanes entre 2018 y 2020). Esta información revela cómo la población venezolana llegada a Uruguay se encuentra en edades adecuadas para incorporarse a la fuerza de trabajo nacional y, en el caso de las mujeres, se da en edades fértiles. Este último dato es de relevancia en un país caracterizado por tener una baja natalidad y presentar una tasa global de fecundidad de 1,6 hijos por mujeres, y ser, al mismo tiempo, el más envejecido de Latinoamérica (INE 2020). De la mano de lo anterior, destaca también, en la información brindada por las ECH (2012-2019) un importante porcentaje de población menor de 18 años cuya incidencia es significativa en un país como Uruguay en donde la población menor de dicha edad no llega a representar el 30% de la población total (INE 2020).

Nivel de estudios

Esta variable permite conocer el grado de calificación de los migrantes venezolanos y, al mismo tiempo, saber si presentan sobre calificación para los puestos de trabajo a los cuales acceden.

Es destacable el alto porcentaje de venezolanos, tanto hombres como mujeres, que poseen titulación universitaria completa: casi un 60% en promedio, e incluso posgrados, cercana al 10%, muy por encima de la media de la población uruguaya que alcanza apenas el 12,3% (ECH, 2012-2019; Encuesta realizada para la

¹³ Encuesta realizada a través de la modalidad: cara cara y autoadministrada. Muestreo: población semilla. Fecha de realización: desde abril de 2019 hasta febrero de 2020. Análisis estadístico: SPSS. Número total de respuestas obtenidas: 121.



investigación de la Cátedra Magallanes entre 2018 y 2020). Si tomamos los datos por separado entre hombres y mujeres se puede observar un porcentaje mayor de estas últimas con títulos universitarios tanto de grado como de posgrado.

Categorías y sectores de trabajo ocupados por los venezolanos

En primer lugar, es destacable el alto grado de ocupación de los trabajadores venezolanos en el mercado laboral uruguayo, por lo menos hasta poco antes del inicio de la emergencia sanitaria. De acuerdo con la información brindada por las ECH (2012-2019), existe una ocupación del 90% de media entre hombres y mujeres, en las edades comprendidas entre los 18 y los 64 años, contra una un poco superior a la del 60% de la población nacional ¿Por qué la población venezolana presentaba hasta antes de la crisis sanitaria un mayor nivel de empleo que la población uruguaya? Una respuesta podría venir acompañada de la teoría de la segmentación laboral de Doeringer y Piore (1971). Determinadas actividades del sector del comercio y de los servicios, junto con las del transporte y del servicio doméstico y del cuidado de enfermos y de personas adultas mayores, han comenzado a ser desechadas por la mano de obra uruguaya por el bajo nivel salarial de las mismas, y los migrantes, en especial los venezolanos, con un alto nivel de calificación y de ciertas habilidades blandas perdidas por los trabajadores nacionales, han comenzado a ocupar esos puestos laborales (Juan Mailhos, asesor de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, 2019)¹⁴.

Estas cifras de ocupación laboral han estado cambiando con la situación actual de emergencia sanitaria a pesar de que Uruguay continúa garantizando el acceso a los servicios básicos -en especial a la salud y la educación- sin distinción de nacionalidad y también de acceso al mercado laboral. A pesar de ello, los venezolanos han sido los más afectados de la presente crisis de acuerdo con los resultados de la actualización del Displacement Tracking Matrix (DTM) -una herramienta que utiliza la Organización de las Naciones Unidas para conocer las características de una población desplazada-. La DTM (2020-21) muestra que el 19% de los venezolanos encuestados en Uruguay está actualmente desempleado, que el 17% de los que trabajan lo hace en la informalidad, que el 24% dice que sus ingresos no le son suficientes para cubrir las necesidades básicas, y que

¹⁴ Juan Mailhos. Gerente Jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Entrevista realizada en noviembre de 2019 por Silvia Facal.



el 11% vive hacinado en pensiones o casas de alquiler. A pesar de ello, la citada herramienta revela también como su acceso a la salud se encuentra garantizado -47% en una mutualista, 42% en un prestador público y 1% en un seguro privado-, y quienes aún no han tenido acceso, debido a su reciente entrada al país, están en un proceso de regulación de su estatus migratorio.

Hasta antes de la crisis sanitaria, Uruguay contaba con un alto índice de empleo en el contexto de un mercado laboral segmentado de tipo *bimodal* o *dual*, (Facal, 2020) con necesidad de mano de obra tanto calificada como no calificada en los sectores formales e informales de la economía. Cuando la mano de obra nacional no logra cubrir esas necesidades, siguiendo los lineamientos de la teoría de Doeringer y Piore (1971), aparece una mano de obra alternativa, como la de los venezolanos, deseosa de acceder a los puestos laborales vacantes.

El nivel de acceso a las categorías y sectores laborales de empleo en Uruguay por parte de los trabajadores venezolanos, de acuerdo a los datos acumulados del período 2012 al 2019 de las ECH (2012-2019), va de la mano con una ocupación, tanto para hombres como para mujeres, en la categoría de empleado privado, seguido de la categoría de trabajador por cuenta propia con local.

Con respecto a la distribución de los venezolanos según el sector de actividad reflejada en la Tabla 2, se puede observar un predominio, a nivel general, de trabajadores en la categoría de comercio, restaurante y hoteles, seguidos de los que trabajan en servicios comunales, sociales y personales.

Tabla 2. Distribución de ocupados venezolanos según sector de actividad económica, por género

Sector de actividad económica venezolanos	Total	Hombres	Mujeres
Agropecuaria y minería	-	-	1
Industrias manufactureras	11	14	8
Electricidad, gas y agua	-	-	1
Construcción	2	4	1
Comercio, restaurantes y hoteles	39	36	41,5
Transportes y comunicaciones	13	19	5,5
Servicios comunales, sociales y personales	34	27	42
Total	100	100	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECH, 2012-2019.



En el sector de los servicios se encuentran comprendidos también quienes realizan tareas de reparto, *delivery*, principalmente hombres. Si tenemos nuevamente en cuenta el nivel de calificación de los trabajadores venezolanos y los trabajos por ellos realizados, se puede observar un alto grado de sobre calificación. La misma es más alta entre las mujeres alcanzando al 26% (ECH 2012-2019), contra cerca del 5% entre las mujeres nativas no migrantes (Facal, 2020).

A su vez, el nivel salarial es un factor importante a tener en cuenta a la hora de conocer con mayor profundidad todo lo relacionado con la inclusión de los trabajadores venezolanos en el mercado laboral uruguayo. De acuerdo con los datos de las ECH (2012-2019), el 71% de los venezolanos ganan menos de 30.000 pesos uruguayos al mes (menos de 750 dólares americanos¹⁵) en un país en donde el salario medio de los trabajadores uruguayos es de 30.312 pesos uruguayos (PwC, 2019) y la canasta familiar del índice de precios al consumo (IPC)¹⁶ es de 83.178 pesos uruguayos (unos 2.060 dólares americanos).

En cuanto al salario percibido, según el género de los trabajadores, se pueden observar también importantes diferencias: existe una paridad entre quienes ganan menos de 30.000 pesos uruguayos. En cambio, cuando se acrecienta el salario, se aprecian diferencias: en la franja salarial entre los 30.001 y los 50.000 (750 a 1.250 dólares americanos), el porcentaje de hombres es mayor al de las mujeres debido al tipo de actividad realizada en donde los sueldos a los cuales acceden estas últimas es menor; en cambio, por arriba de los 50.001 se produce una leve diferencia a favor de las mujeres, relacionada con un predominio de cargos de responsabilidad ejercidos por estas. Los salarios citados exponen también importantes carencias en términos de ingresos, lo cual lleva a los trabajadores venezolanos, como también ocurre con los nacionales, a aumentar sus horas de trabajo y a multiemplearse, es decir, a tener más de un empleo para afrontar sus gastos mensuales. De acuerdo con el Monitor del Mercado Laboral (2019), y teniendo en cuenta únicamente a los trabajadores del sector privado, donde predominan los venezolanos, debido a su bajo acceso aún al sector público, el índice de precariedad y de multiempleo ha estado subiendo desde 2015. Los re-

15 Cálculo realizado en base a una cotización de la moneda de Estados Unidos de 40 pesos uruguayos por cada dólar.

16 Referida a un grupo familiar representativo de los ingresos medios de Montevideo, correspondiendo a un tamaño promedio de 3,3 personas por hogar y en el que dos de ellas perciben ingresos.



sultados de la encuesta realizada en el seno de la Cátedra Magallanes muestran resultados muy similares destacando la importante inclusión de los trabajadores venezolanos en el sector servicios tanto en hombres como en las mujeres. Estas últimas destacan en el servicio de acompañante a enfermos y ancianos; servicio doméstico; atención al público en comercios al por menor y mayor en ventas; atención en *call-center*; mucamas en hoteles; etc.

Una vez los trabajadores venezolanos, tanto hombres como mujeres, llevan más tiempo residiendo en el país, comienza a producirse una mayor inclusión en trabajos de mayor cualificación debido a diferentes circunstancias, como el reconocimiento de sus titulaciones o su experiencia laboral, ya en el país de acogida. Entre los puestos laborales de alta calificación, destacan, a modo de ejemplo, los vinculados a la tecnología. con un nivel de desempleo del 0% en Uruguay.

Más arriba se afirmaba como los trabajadores venezolanos han sido los más perjudicados en la permanencia en el empleo durante la crisis sanitaria del Covid-19 y entre ellos las mujeres. Esto se debe principalmente al hecho de que justamente se encontraban, antes del estallido de la misma, ocupando los sectores vinculados a los servicios y en concreto aquellos más golpeados por la crisis como el comercio y el turismo. Con relación a las mujeres, de acuerdo a los datos de la DTM (2020-21), estas representan el 65% de los venezolanos que pasaron a la órbita de los desempleados. Centrándonos también en esta mayor precariedad laboral presente entre las mujeres, se debe destacar también, como las mismas son más proclives a caer en la trata de personas con fines de explotación sexual debido a su mayor vulnerabilidad a la hora de acceder al empleo (Sandra Perroni, 2021¹⁷). Por tal motivo, ha aumentado la preocupación por la situación de las mujeres venezolanas por parte de las autoridades gubernamentales, departamentales y de las ONG´s que se dedican a brindar apoyo a estas migrantes.

Conclusiones

Los migrantes venezolanos, considerados como refugiados por parte de OIM y ACNUR, llegados a Uruguay, a partir de 2013 en adelante, como respuesta a la crisis vivida en su país de origen presentan un ligero grado de feminización y, al

17 Sandra Perroni. Integrante de El Paso en colaboración con Instituto Nacional de Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social. Entrevista realizada en abril de 2021 por Silvia Facal.



mismo tiempo, un alto grado de calificación el cual no ha sido suficientemente bien aprovechado.

Hasta 2019 la inclusión laboral de los venezolanos presentó cifras superiores a la presentada por la población nacional. Pero, con el inicio de la crisis sanitaria, los venezolanos, y en mayor proporción las mujeres, se vieron fuertemente perjudicados en su acceso al mercado de trabajo.

A pesar de los efectos de la actual crisis sanitaria continúa produciéndose la entrada al país de venezolanos utilizando el mecanismo de “razones humanitarias” para solicitar su ingreso, engrosando con ello las cifras de refugiados.



Bibliografía

ACNUR (2021): Situación en Venezuela. Disponible en: <https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html>

Castillo Crasto, T y Reguant Álvarez, M. (2017). Percepciones sobre la migración venezolana: causas, España como destino, expectativas de retorno. En: Migraciones 41. 133-163.

DNM (2020 y 2021): Estadísticas de pasajeros ingresados y egresados (2008-2020). Montevideo: Estadísticas de la Dirección Nacional de Migración.

DTM (Displacement Tracking Matrix) (2020-2021). OIM. Disponible en: <https://dtm.iom.int/>

Doeringer, P. y Piore, M.J. (1985) [1971]: Mercados internos de trabajo y análisis laboral, Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Encuestas Continuas de Hogares (2012-2019): Montevideo: Instituto Nacional de Estadística.

Facal, Silvia (2020): "Intégration sur le marché du travail des immigrants récents en Uruguay (2008-2016)". En: Le Moing, A., Ouaked, S. & Le Bihan-Colleran, C. (dir.): Les défis de la diversité culturelle dans le monde du travail au XXIe siècle. Politiques, pratiques et représentations en Europe et dans les Amériques, Bruxelles, Peter Lang, pp. 125-141.

INE (2020): Anuario Estadístico Nacional. 2019. Montevideo: INE.

Junta Nacional de Migración (2014-2020): Informe de residencias Mercosul. Montevideo: MRREE.

Ley 18.250 (2008). Ley de Migración. Disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18250/2008>

Ley 19.254 (2014). Modificación a la Ley de Migraciones 18250. Obtención de residencia permanente a familiares de nacionales de los estados parte y asociaciones del Mercosur. Disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19254/2014>

Monitor del Mercado Laboral (2019): Montevideo: Observatorio de Seguridad Social.

Páez, T. (2015): La voz de la diáspora venezolana. Madrid: Catarata.

PwC (2019): Encuesta sobre las remuneraciones y los beneficios que 109 empresas les dieron a sus colaboradores en 2018. Montevideo: PwC.



CADERNOS DA

DIVERSIDADE

CULTURAL

Boas Práticas
do MERCOSUL

Diversidade e Direitos Culturais

VOL. IV



**Cadernos da Diversidade Cultural: Boas práticas do MERCOSUL:
Diversidade e Direitos Culturais; compilado- 4a edição bilingüe-
Buenos Aires: Ministério de Cultura da Nação, 2023.
Livro digital,PDF; Edição bilingüe: espanhol; português.**

Créditos

Coordenação geral e Compilação

Alicia Graciela Agüero

Laura Andrea Arruzazabala

Orlando César Agüero

Tradução

Aurora Zandoná Lubary

Secretaria Técnica do Mercosul Cultural

Maximiliano Vera

AGRADECIMENTOS

Aos Estados Partes e Associados do MERCOSUL que participaram desta Edição: Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina.

É UMA PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL DO MERCOSUL.
PRESIDÊNCIA PRO-TEMPORE ARGENTINA 2023

Seção em língua portuguesa

Apresentação do Ministro de Cultura da Nação Argentina

Este ano, a região está comemorando diversos acontecimentos históricos de relevância transcendental para cada um de nossos países. O Chile comemora o quinquagésimo aniversário do trágico golpe militar que pôs fim ao governo da Unidade Popular de Salvador Allende. A Argentina, por sua vez, celebra um fato inédito: quarenta anos de democracia ininterrupta. Tivemos que passar por momentos de profunda escuridão, dos quais conseguimos sair transformando a dor em resistência. Tornamos isso possível por meio da vontade, da convicção e do compromisso. Nossa homenagem permanente aos 30.000 detidos desaparecidos, às organizações de Direitos Humanos e, especialmente, às Mães e Avós da Praça de Maio, que tanto lutaram naquela época e continuam lutando agora.

Mas ainda temos dívidas pendentes que hoje, mais do que nunca, precisam ser saldadas para fortalecer nossas democracias e também para construir sociedades mais justas e igualitárias para todos. Uma delas é continuar trabalhando para defender profundamente a diversidade dos nossos povos, idiomas e culturas. Assim como levantamos as bandeiras dos direitos humanos para sair daqueles anos sombrios, hoje é necessário entender a diversidade como um direito que devemos defender e proteger. Os dois conceitos estão intimamente ligados. Não pode haver inclusão genuína sem reconhecimento, respeito e defesa da diversidade. Em nosso campo, é necessário fazer dessa defesa uma premissa fundamental, um direito cultural inevitável.

De acordo com a UNESCO, “a diversidade cultural amplia as alternativas, nutre diferentes capacidades, valores humanos e visões de mundo e permite que a sabedoria do passado nos prepare para o futuro. A diversidade cultural pode promover o desenvolvimento sustentável de indivíduos, comunidades e países. E é por isso que trabalhamos com uma perspectiva de respeito, proteção e preservação da diversidade de toda as culturas, para o presente e o futuro”.

Esses cadernos, produzidos no momento em que a Argentina ocupa a Presidência Pro Tempore do MERCOSUL Cultural, apontam nessa direção, incluindo temas tão importantes como a história da cultura afro, a necessária capacitação em educação antirracista, migração, legislação a favor da diversidade e comunidades de imigrantes, entre muitos outros.

Celebramos, portanto, que nossa região e cada um dos seus países assumam a diversidade como um dos pilares fundamentais a partir dos quais pensar, elaborar e desenvolver políticas públicas culturais.

Prof. Tristán Bauer
Ministro de Cultura da Nação Argentina

ARGENTINA

**“AS COMUNIDADES DE IMIGRANTES
NA ARGENTINA COMO SUJEITOS
DE DIREITOS CULTURAIS”**



Presidente da República Argentina

Dr. Alberto Fernández

Vice-presidenta da República Argentina

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Ministro de Cultura

Professor Tristán Bauer

Secretário de Gestão Cultural

Federico Prieto

Diretora Nacional de Diversidade e Cultura Comunitária

María Laura Bianchi

Diretora de Direitos Humanos na Cultura

María Fabiana Almeida

“As comunidades de imigrantes na Argentina como sujeitos de direitos culturais”


por **Federico Prieto**

Nos primeiros dias de maio de 2023, o Ministério de Cultura da Nação, através da Secretaria de Gestão Cultural, sob minha responsabilidade, apresentou um programa integral destinado a estimular e promover o desenvolvimento das atividades de matriz cultural encaminhadas por coletividades de imigrantes na Argentina. Fazemos isso entendendo que são organizações que impulsionam a participação coletiva e comunitária, e que reconhecemos sua centralidade na revalorização de suas expressões identitárias, sustentadas em harmonia com os processos culturais de outras comunidades, o que permitem ampliar as relações e interesses compartilhados no território onde se desenvolvem diferentes atores culturais.

Os objetivos que propusemos para nossa gestão dentro do Ministério de Cultura da Nação se articulam em torno de quatro eixos de organizadores de políticas públicas de cultura: cultura comunitária, federalismo, diversidade e impacto nos territórios. As comunidades de imigrantes são coletivos de matriz cultural que desenvolvem atividades e sustentam marcos simbólicos e identitários que, sem dúvida estão enquadrados nesse conjunto de eixos de gestão.

As imigrações são inerentes à história da humanidade e são, sem dúvida, uma das fontes originais da riqueza simbólica e material que constitui essa diversidade cultural, que como indica a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais aprovada pela UNESCO em 2005, é uma característica essencial da humanidade.

Na Argentina, a história e a cultura levam a marca das identidades de diversos povos, seu tecido social e sua riqueza. Essas comunidades foram se entrelaçando também com uma identidade nova nos territórios que habitam - e continuam fazendo-o - em um novo processo sócio-histórico e político, pois não reproduzem a vida de seus lugares de origem, mas são partícipes da vida social local, carregando suas tradições, línguas, práticas e imaginários, junto com uma diversidade de fluxos originários e migratórios, compostos por populações aborígenes, afro-descendentes e imigrantes de diferentes continentes.




Muito antes da conformação do nosso Estado-Nação, várias comunidades aportaram ao nosso país um conjunto de pontos de vista próprios e representativos dessa diversidade, desde o social, o econômico, o político, o produtivo e o cultural. É fundamental recuperar também a memória dessas primeiras comunidades migrantes, evitando apagá-las o afundá-las em uma identidade nacional unificada, como quiseram fazer certas elites para negar a diversidade, especialmente na época da consolidação do chamado Estado conservador burguês durante a segunda metade do século XIX.

Durante esse período, no entanto, a Argentina se posicionou como um lugar historicamente aberto aos movimentos migratórios, embora a decisão oficial sonhasse com as migrações do hemisfério norte, no pressuposto de que portavam um universo cultural convergente com as ideias do Estado que as elites pretendiam estabelecer. Assim, a Constituição Nacional (Art. 14º) e a Lei Nacional 25.871 reconhecem à migração como um direito humano, e garantem que todos os estrangeiros residentes no país gozam dos mesmos direitos civis que o cidadão argentino. Esta condição, além dos sonhos das elites conservadoras que imaginavam a abertura multicultural da Argentina, facilitou os modos de organização, produção e circulação de serviços e bens culturais que deram à população um modo de vida particular em todo o território nacional.

Nosso trabalho ocorre no presente e não pode evitar esse viés histórico. Essa diversidade cultural carregada pelas comunidades de imigrantes também vem das profundezas de nossa história e se expressa de forma dinâmica, fundando, por sua vez, novas tradições que não surgem mais de práticas originais, mas são constituídas no encontro nesse novo território, com outros migrantes da mesma origem, com migrantes de outras nacionalidades e com populações que se estabeleceram desde tempos anteriores.

Nesse sentido, é de vital importância continuar promovendo o desenvolvimento das organizações formadas no território nacional que representam as diversas coletividades. Reconhecê-las não apenas em sua dimensão histórica, mas também como espaços de encontro intergeracional, onde tomam forma iniciativas que defendem a preservação de suas expressões culturais e caracterizam a vida de uma população ou comunidade com permanência no nosso território.

Esse programa é desenvolvido sob essas premissas e atualmente é implemen-




tado por meio de uma chamada aberta a organizações comunitárias formalmente constituídas e por municípios com poucos habitantes, transferindo recursos econômicos diretos para a concreção de várias atividades que incluem projetos ligados à organização de festivais ou homenagens, estratégias de comunicação e divulgação, projetos de capacitação dirigidos aos membros da comunidade ou para o público em geral, pesquisas históricas, antropológicas ou inovadoras (voltadas para o desenvolvimento de plataformas tecnológicas, aplicativos ou desenvolvimentos parecidos), trabalhos relacionados à recuperação ou à preservação do patrimônio cultural da comunidade, entre outras propostas que aperfeiçoem as atividades culturais das comunidades de imigrantes.

A criação do programa de apoio às comunidades de imigrantes na Argentina tem seus antecedentes durante minha gestão como diretor da Secretaria de Cultura da província de Entre Ríos, de onde sou oriundo.

Uma delas é a aprovação da lei que estabelece o “Dia dos Afro-Entrerrianos e da Cultura Afro-Litorânea”, instrumento que nos permite reconhecer a pré-existência de habitantes afro na província, mas, especialmente, tomar consciência da importância da comunidade afro e da cultura afro-litorânea como parte da nossa identidade provincial. Além do fato simbólico de impor uma data para celebrar essa presença na história da nossa província, que foi estabelecida em comemoração a María Francisca Lencinas, a primeira afro-entrerriana registrada nos documentos escritos preservados na província, a lei promove ações positivas para que, por meio de políticas públicas, a comunidade e a cultura afro-litorâneas em suas diferentes disciplinas sejam visibilizadas, incluídas e apoiadas. Essas políticas também devem incorporar abordagens de gênero.

Apenas alguns dias depois, em abril de 2021, foi aprovada a lei provincial 10878, que declara as coletividades localizadas em Entre Ríos como parte do Patrimônio Cultural. A evolução proposta por essa legislação é que seu texto não apenas as inclui, a partir dos diferentes formatos, como associações capazes de realizar atividades, contratar e exercer uma vida social de acordo com as regras que as habilitam, mas também as considera parte do patrimônio cultural provincial. O regulamento reconhece nesse elemento distintivo, sua condição de coletivos de matriz cultural, sua característica fundamental. Em seu artigo número quatro, entre outras coisas, a lei fornece algumas diretrizes que são importantes de se-




rem destacadas. As políticas promovidas pela lei devem levar em conta o pluralismo, a diversidade e o valor do multiculturalismo como fator determinante da identidade provincial, promover a participação dos jovens de cada coletividade e incentivar encontros entre instituições para a disseminação e inter-relação das diferentes culturas e coletividades. Trata-se de atores culturais portadores de conhecimentos, bens e tradições que são dispositivos vivos, simbólicos e materiais, capazes de servir ao processo contínuo de consolidação, transmissão e intercâmbio dentro de si mesmos, intergeracionalmente, com outras comunidades migrantes e com o restante do povo da província e da Nação.

A identidade cultural funciona como um elemento de coesão em nossas comunidades e, portanto, é um processo contínuo de construção. Nesse sentido, é fundamental que as associações representativas das coletividades programem uma série de ações, propostas e programas que permitam que seus associados se sintam parte da própria vida desses repertórios culturais, que são significativos para as comunidades locais e fonte de transmissão de histórias e estórias que se atualizam nas próprias definições de cada coletividade.

Os membros das coletividades se reúnem e se organizam para lembrar, manter, reproduzir e divulgar suas tradições culturais por meio de festas e celebrações populares; por meio de expressões artísticas como música, dança, propostas pedagógicas em suas línguas, ensino de seu artesanato e/ou gastronomia típica, práticas esportivas e jogos, bem como para representar seus interesses comuns.


O processo que levou à aprovação da lei, especialmente a inclusão de uma cláusula que estabelece a impenhorabilidade das propriedades pertencentes a cada uma das coletividades, foi o resultado de um processo elaborado em conjunto com as organizações que as representam, com as quais organizamos reuniões com uma agenda de diálogo aberto para descobrir quais eram as demandas comuns e como poderíamos construir linhas de ação conjuntas, que depois seriam transformadas em programas executados de forma colaborativa entre o Estado e as organizações, sempre buscando responder a essas necessidades específicas. Após esse caminho comum, do qual participaram as diferentes coletividades instaladas nas diferentes partes da província, essa lei foi aprovada.



Mas esse processo foi fundamental para reconstruir, ao mesmo tempo, o lugar das coletividades na comunidade, como o centro dos processos identitários e culturais. Esse percorrido, que se concretizou em todo o território provincial, foi fundamental para fortalecer o vínculo entre os indivíduos e cada uma das coletividades e o sentimento de pertença, a fim de fortalecer os direitos de cada indivíduo à cidadania e também para promover o exercício dessa cidadania cultural, que de alguma forma implica dizer “eu sou isso” e poder reivindicar os direitos que surgem dessa identidade, que é individual e coletiva ao mesmo tempo. É assim que chegamos à síntese que converge para a elaboração do projeto de lei.

Ela teve um grande impacto na proteção dos ativos de muitas organizações. A lei foi aprovada quando ainda estávamos no meio da pandemia, que teve um efeito devastador sobre a capacidade das organizações de acessar a recursos econômicos. Por esse motivo, a lei opera, por um lado, tornando visível o trabalho das organizações que representam as coletividades, a fim de reforçar sua presença como sujeitos de direito com seu próprio nome, e não apenas como parte de uma abstração vazia englobada no conceito de cidadania. A impenhorabilidade decretada na lei repercute na salvaguarda dos bens imóveis pertencentes às coletividades, como centros culturais capazes de disseminar, promover e desenvolver as culturas e suas diversidades. Esses bens, que em muitos casos poderiam ter sido perdidos como resultado da crise desencadeada pela pandemia da Covid-19 foram protegidos por essa lei. O reconhecimento da província dessas associações como atores multiculturais, sujeitos coletivos de diferentes origens que convergem em um território específico, é fundamental para sua sustentabilidade legal.

Na província de Entre Ríos, não havia precedentes legais para esse reconhecimento das coletividades, sobretudo para o desenvolvimento do turismo e da gastronomia, levando em conta que foram criados circuitos para as colônias judaicas, para as colônias dos alemães de Volga e também para as festas populares que representam cada uma dessas coletividades, sejam santos padroeiros, relacionadas a um aniversário, ou mesmo algum método produtivo simbólico que as represente. Também é muito importante entender que a diversidade cultural de Entre Ríos está historicamente cruzada, já que a primeira colônia judaica da América Latina foi estabelecida em nossa província, em Basavilvaso, ou a primeira colônia italiana na Argentina, em Chajarí. Também temos uma grande comunidade franco-suíça que fundou San José, ou a comunidade luxemburguesa, que é



a de maior tamanho na Argentina. A lei, sem dúvida, articula o direito positivo por meio da proteção de bens destinados a atividades comunitárias e culturais, além de institucionalizar esses diferentes processos que constituíram nossa história e nossa identidade e que foram articulados por meio da instalação de polos produtivos, do desenvolvimento da cultura local e da atração do turismo.

As políticas públicas devem ser um dispositivo que busque canalizar os processos da cultura comunitária nos territórios em favor das demandas e necessidades de cada lugar e de cada momento, priorizando a diversidade, a não discriminação e entendendo a centralidade dos direitos culturais como parte dos direitos humanos, sem status inferior aos demais previstos na declaração universal dos direitos humanos.

Por essa razão, o Ministério de Cultura da Argentina impulsa um modelo de gestão federal que promove o desenvolvimento local em todo o país de forma justa e equitativa, com base no território como um espaço de construção e transformação das relações sociais e culturais. A partir dessa diversidade de identidades, e garantindo o direito de acesso em escala federal, o objetivo é construir uma nacionalidade que, ao contrário do que as elites dominantes tentaram fazer na segunda metade do século XIX, inclua todos, sem dissolver as particularidades locais.

Bibliografía

Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales UNESCO. París, 2005

Constitución de la Nación Argentina, 1994

Ley Nacional N° 25871/2004 (Ley de Migraciones), 2004

Ley Provincial N° 10884. Entre Ríos (Argentina), 2021

BRASIL

DIVERSIDADE E DIREITOS CULTURAIS





Presidente da República

Luiz Inácio Lula da Silva

Ministra da Cultura

Margareth Menezes

Secretária de Cidadania e Diversidade Cultural

Márcia Rollemberg

Diretor da Política Nacional de Cultura Viva

João Pontes

**Diretora Substituta de Promoção das
Culturas Populares**

Sandra Cipriano Chaves

Diretor Substituto de Promoção da Diversidade Cultural

Neuran Pereira da Silva

**Chefe de Gabinete da Secretaria de Cidadania e
Diversidade Cultural**

Allison da Silva Pereira

**Coordenadora-Geral da Política Nacional de
Cultura Viva**

Iara da Costa Zannon

Colaboradores

Giselle Dupin

Tião Soares

Rodrigo Dias

Dialogar sobre diversidade e direitos culturais implica em estabelecer uma relação entre o indivíduo e seu contexto de vida, sua comunidade, sua memória, sua identidade e seu senso de pertencimento. A cultura está intrinsecamente ligada ao exercício da cidadania e, no Brasil, é um direito constitucional respaldado por preceitos internacionais. Nesse sentido, o presente artigo destaca a importância dos direitos culturais para a diversidade da sociedade brasileira, que é um patrimônio inestimável de sua história e formação. Além disso, o artigo ressalta as dificuldades enfrentadas pelo setor cultural diante da pandemia da Covid-19 e expõe as ações do Ministério da Cultura do Brasil para preservar os direitos e resgatar a cadeia econômica do setor cultural, por meio de três importantes marcos legais: a Lei Aldir Blanc 1, em 2020 e a Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2, em 2022. A atual sequência de prioridades para 2023- 2026, com a retomada do Ministério da Cultura e as regulamentações e ampliação das ações de apoio, fomento e valorização dos agentes culturais, desempenham um papel crucial na preservação e renovação das expressões culturais brasileiras, na capacidade de diálogo intercultural em favor da diversidade global, com real impacto na economia criativa e na promoção do exercício e usufruto dos direitos culturais em nosso território.

Margareth Menezes
Ministra da Cultura do Brasil

Marcos legais estruturantes da cultura e da diversidade cultural no Brasil

O Brasil, por sua formação histórica, tem a diversidade como marca de sua sociedade. Os povos indígenas, ocupantes originários do território, de línguas diversas, foram gradualmente deslocados para o interior à medida que os conquistadores e colonizadores europeus avançavam pela costa e estabeleceram o domínio português. Ao mesmo tempo, milhões de africanos de diversas nações, com formas diversas de organização social, língua e culturas, foram trazidos escravizados para sustentar a economia colonial. A combinação dessas matrizes culturais distintas deu origem ao povo brasileiro, que se caracteriza pela diversidade cultural presente nas artes, culinárias, tradições, valores e costumes. Essa diversidade é uma característica fundamental e estruturante da sociedade brasileira.

Os direitos culturais são fundamentais para que todas as pessoas possam livremente expressar e desfrutar de sua cultura, sem quaisquer tipos de restrições ou discriminações. A Constituição Federal Brasileira de 1988 reconhece e valoriza a diversidade cultural, garantindo em seus artigos 215, 216 e 216A, a promoção e preservação do patrimônio cultural brasileiro em todas as suas formas de manifestação. Tais artigos constitucionais representam importantes e imprescindíveis avanços na garantia dos direitos culturais. É obrigação dos governos federal, estadual, distrital e municipal valorizar, difundir, preservar, proteger, promover e fomentar bens, patrimônios materiais e imateriais, práticas e saberes histórico-culturais e artísticos em âmbito nacional, regional e local, conforme destacado a seguir:

“(…)

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.

2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.

3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando

ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à:

- I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
- II produção, promoção e difusão de bens culturais;
- III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;
- IV democratização do acesso aos bens de cultura;
- V valorização da diversidade étnica e regional.

(...)

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

- I - as formas de expressão;
- II - os modos de criar, fazer e viver;
- III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
- IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
- V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico (...)"

É importante ressaltar que a promoção dos direitos culturais não se restringe ao Estado. Cada indivíduo e os mais diversos movimentos sociais organizados na sociedade possuem responsabilidade social, o que está expresso no Artigo 216 A da Constituição Federal do Brasil, a seguir:

Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais.

A cultura é também reconhecida como um elemento essencial da identidade e da autoexpressão das pessoas em outros importantes marcos legais internacionais, em que o Brasil é também signatário, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e a Convenção Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1976). Além destes tivemos também a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural (2001) e a Declaração de Friburgo (2007) que abrangem aspectos dos direitos culturais, incluindo o pluralismo cultural, as dimensões simbólicas, culturais e econômicas da cultura.

Em agosto de 2007, o Brasil promulgou, por meio do Decreto nº 6.177, a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, que foi assinada em Paris durante a 33ª Reunião da Conferência Geral da UNESCO em 20 de outubro de 2005. Essa Convenção destaca a diversidade cultural como um fator essencial para a humanidade, nutrindo capacidades e valores humanos e impulsionando o desenvolvimento sustentável de comunidades, povos e nações. Na Conferência Mundial da UNESCO sobre Políticas Culturais e Desenvolvimento Sustentável – MONDIACULT, em setembro de 2022, a comunidade internacional da área de cultura expressou o compromisso de “promover um ambiente propício ao respeito e ao exercício de todos os direitos humanos, em particular os direitos culturais – individuais e coletivos – em todos os domínios da cultura”, incluindo o ambiente digital. O objetivo é construir um mundo mais justo e equitativo, reduzindo as desigualdades, especialmente para grupos vulneráveis, como mulheres, jovens, crianças, povos indígenas, afrodescendentes, LGBTQIAP+ e pessoas com deficiência.

Todos os marcos legais supracitados e a incorporação da diversidade e do direito cultural à Constituição Brasileira de 1988 como componentes estruturais e estruturantes foram fundamentais para que, mesmo durante momentos históricos difíceis – como o recente ataque à democracia, à pluralidade e às identidades culturais, a profunda crise sanitária, econômica e social gerada pela pandemia da COVID-19, e a resistência do conjunto dos movimentos culturais, artísticos, de coletivos e grupos sociais das culturas populares, das comunidades tradicionais de matriz africana, quilombolas, ribeirinhas, das nações indígenas, dos segmentos LGBTQIAP+, das mulheres, das pessoas com deficiência, dentre outros – o país tivesse mobilização e respaldo legal para garantir direitos e impedir mais retrocessos.

Um dos frutos fundamentais gerados por este movimento de articulação cultural, junto ao Congresso Nacional, em momentos tão adversos, foi justamente a criação e implementação das Leis: Aldir Blanc 01 nº 14.017/ 2020; Paulo Gustavo, oficializada como Lei Complementar nº 195/ 2022; e Aldir Blanc 02 nº 14.399/ 2022.

As leis de fomento: Aldir Blanc, Paulo Gustavo e o resgate da cultura do Brasil em tempos de crise

No Brasil, os direitos culturais são efetivamente materializados na “ponta”, ou seja, nas cidades, vilas e províncias, na vida de cada pessoa e instituições e coletivos culturais, por meio da implementação de políticas públicas que envolvem o patrimônio cultural, o patrimônio imaterial e a memória artística e cultural do país. Essas políticas devem apoiar a produção, difusão, consumo e fruição de bens e serviços culturais, bem como o desenvolvimento individual e coletivo por meio de ações de formação cultural em escolas, práticas e atividades comunitárias, bairros e territórios.

Os direitos culturais também estão integrados com o desenvolvimento econômico. A cultura e a arte, além de constituírem um pertencimento individual e coletivo de uma sociedade, são responsáveis no Brasil pela geração de cerca de cinco milhões de empregos diretos, representando mais de 5% do mercado de trabalho no país e movimentando quase 4% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. A construção e execução de políticas públicas para fomentar este importante sistema é gerido pelo Estado por meio do Sistema Nacional de Cultura, em construção que visa a articulação dos entes federativos para a democratização das políticas públicas culturais por todo o território nacional, um modelo de gestão sistêmico para assegurar a cultura e a diversidade cultural como um direito, conforme previsto na Constituição Federal.

Este importante sistema da economia criativa e cultural do país sofreu um imenso baque com a crise sanitária global, uma das maiores catástrofes das últimas décadas. A pandemia de Covid-19 paralisou o mundo em todos os aspectos, principalmente por gerar uma mudança de rota do motor do capitalismo com a estagnação da economia e a cadeia econômica da cultura foi uma das mais afetadas – sendo a primeira a fechar as portas e uma das últimas a conseguir voltar com suas atividades.

Os trabalhadores desta cadeia tiveram desafios aprofundados, que já eram anteriores à crise sanitária, como o elevado nível de informalidade – a maior parte composto por trabalhadores autônomos sem direitos trabalhistas ou previ-

denciários assegurados – contratos temporários e projetos de curta duração. O cancelamento de atividades culturais, encontros, eventos, mostras, shows, apresentações, formações, troca de saberes, em consonância com a fragilidade de resguardo de direitos em que estes profissionais vivem, teve um impacto fatal para o setor que necessitou de uma resposta rápida dos poderes da República para buscar atender as necessidades deste sistema.

Foi neste contexto que surgiu a Lei Aldir Blanc 1/2020, que pode ser considerada, além de um importante marco legal, uma boa prática que o Brasil desenvolveu para a garantia do direito e da diversidade cultural. Incitados pela sociedade civil organizada e os agentes culturais, os poderes executivo, legislativo e judiciário tomaram, com a aprovação desta legislação, medidas emergenciais para apoiar o setor artístico-cultural com recursos para garantir a renda e sobrevivência dos trabalhadores da cultura, com a continuidade das atividades dos setores artísticos, culturais e da economia criativa, dos espaços culturais, com fomento à criação de novos conteúdos e produções culturais, incluindo o ambiente digital.

Os recursos foram executados de maneira descentralizada, mediante transferência da União para os Estados, Municípios e o Distrito Federal para que estes pudessem fazer a distribuição aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, processo desencadeado via sistema que permite o monitoramento e controle do recurso público. O inédito investimento foi de 3 bilhões de reais, repassados para todos os estados da federação e para 75% dos municípios do país. Ao consideramos a vastidão do Brasil, com 5.568 municípios, mais o Distrito Federal, com territórios de diferentes tamanhos, realidades, geografias e distribuições populacionais e socioeconômicas, a implementação desta lei é um marco histórico, pelo volume de recursos e por envolver muitas instâncias decisórias e pastas ministeriais, além de contatos permanentes junto aos governos estaduais e municipais.

Os dados até o final de 2021 já nos trazem possibilidade de mensurar o impacto do auxílio emergencial na cultura brasileira:

- Os municípios receberam 1,38 bilhão de reais, dos 1,5 bilhão disponibilizados pelo Governo Federal, beneficiando 4.176 municípios, o que representa 75% do total.

- Os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal receberam 100% dos recursos destinados, totalizando cerca de R\$ 1,6 bilhão de reais, inclusive com o repasse dos recursos não solicitados por alguns municípios, por meio de um processo de reversão.
- Foram realizados cerca de 4 mil editais, chamadas públicas e premiações em todo o Brasil, contemplando a produção cultural, o apoio aos artistas e espaços culturais diversos, bem como os Pontos e Pontões de Cultura que atuam com atividades culturais de base comunitária e expressam a matriz da diversidade cultural no território, o dito Brasil profundo.
- Ao todo, cerca de 2,68 milhões de trabalhadores e trabalhadoras da cultura foram beneficiados com o auxílio emergencial mensal, além de 25 mil pequenas empresas culturais, instituições e organizações culturais comunitárias que receberam o subsídio mensal para manutenção de seus espaços.

A partir dos dados apresentados, podemos reafirmar a importância fundamental da Lei Aldir Blanc 1/2020, no resgate do setor cultural brasileiro dentro deste contexto de profunda crise. A lei assegurou a garantia dos direitos culturais, possibilitando uma renda mínima aos trabalhadores da cultura, apoiando os espaços culturais e fomentando a produção cultural. Além de contribuir para a preservação do patrimônio material e imaterial, de estimular a criação e a circulação de novos conteúdos, bem como para o desenvolvimento social dos profissionais dedicados à cultura e às artes. Não podemos deixar de destacar também o impacto positivo na economia local, estadual e nacional.

Contudo, a Lei ainda era insuficiente para a completa retomada do setor cultural e para dar solução ao passivo econômico herdado pela pandemia e retrocessos vivenciados na política pública de cultura. Assim, no ano de 2022 com amplo apoio e mobilização da sociedade civil, ocorreu a construção da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc 2, que visam o respeito à diversidade, à democratização e à universalização do acesso à cultura, com investimentos, respectivamente, na ordem de 3,8 bilhões de reais e de 3 bilhões de reais anuais a partir de 2023. Mesmo em um contexto adverso, que exigiu que o então Governo Federal vetasse

estas legislações, à época, a sociedade civil organizada, com muita mobilização e em consonância com o Congresso Nacional, conseguiu derrubar estes vetos e conquistou que estas fundamentais legislações entrarem em vigor.

A Lei nº 14.399/2022, conhecida como Aldir Blanc 2/2023, terá duração de cinco anos e a União repassará anualmente recursos a serem aplicados em editais e chamadas públicas de fomento ao Setor Cultural, como forma de apoio descentralizado às artes e à cultura com recorte específico de R\$600.000,00 anuais exclusivos para a Política Nacional de Cultura Viva (Lei 13.018/2014), que fomentará a rede de Pontos e Pontões de Cultura hoje com aproximadamente 4,5 mil pontos certificados. O processo de regulamentação desta legislação é para 2023, e já está em curso no Ministério da Cultura.

Já a Lei Complementar (LC) nº 195/2022, conhecida como Lei Paulo Gustavo – assim denominada em homenagem a um singular artista cômico, muito querido pelo público brasileiro, vítima da Covid-19 em maio de 2021 – foi regulamentada em 11 de maio de 2023 pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Esta permite a liberação de 3,8 bilhões de reais provenientes do Fundo Setorial do Audiovisual, setor que receberá 70% dos recursos, e outras fontes vinculadas ao Fundo Nacional da Cultura.

Assim, municípios, estados e o Distrito Federal poderão investir na produção de uma variedade de manifestações culturais e artísticas, incluindo também a música, dança, pintura, escultura, cinema, fotografia e artes digitais. Para acessar os recursos, os entes federados deverão elaborar e apresentar planos de ação, os quais serão analisados pelo Ministério da Cultura. A transferência dos recursos para os agentes culturais será realizada por meio de editais, chamamentos públicos, prêmios, aquisição de bens e serviços relacionados ao setor cultural, ou outras formas de seleção pública e democrática.

Merece destaque que em ambas as legislações encontramos como diretrizes estruturais a importância da diversidade cultural e da democratização da cultura, como previsto na Lei Aldir Blanc 2, que em seu artigo terceiro versa sobre os princípios desta política nacional:

Art. 3º São princípios da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura:

- II - universalidade no atendimento às áreas de atuação previstas nesta Lei;
- III - descentralização dos recursos de que trata esta Lei;
- IV - respeito à diversidade cultural;
- V - gestão democrática e compartilhada dos poderes públicos entre si e entre eles e a sociedade civil;

A ideia está presente também no artigo 17 da Lei Paulo Gustavo:

Art. 17. Na implementação das ações previstas nesta Lei Complementar, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão assegurar mecanismos de estímulo à participação e ao protagonismo de mulheres, de negros, de indígenas, de povos tradicionais, inclusive de terreiro e quilombolas, de populações nômades, de pessoas do segmento LGBTQIA+, de pessoas com deficiência e de outras minorias, por meio de cotas, critérios diferenciados de pontuação, editais específicos ou qualquer outro meio de ação afirmativa que garanta a participação e o protagonismo desses grupos, observadas a realidade local, a organização social do grupo, quando aplicável, e a legislação relativa ao tema.

Ressalta-se que o setor cultural é composto por uma ampla variedade de segmentos artísticos, profissionais, trabalhadoras e trabalhadores da cultura e demais envolvidos direta ou indiretamente nas atividades artístico-culturais. Isso inclui desde os agentes e fazedores de cultura que entregam a ação cultural, até costureiras, produtores, seguranças, cenógrafos, maquiadores, cinegrafistas, assistentes, iluminadores e muitos outros profissionais que participam dos arranjos produtivos da cultura. Além disso, espaços e equipamentos culturais, como salas, teatros, bibliotecas, organizações, instituições e coletivos culturais, também são parte ativa e integrante desse setor.

Podemos afirmar que estas legislações aqui tratadas, bem como a retomada do Ministério da Cultura neste novo governo, com sua centralidade enquanto indutor e articulador das políticas culturais no nível nacional, têm sido fundamentais para estimular a revitalização da política cultural, recuperar postos de trabalho, auxiliar na manutenção de projetos, incentivar atividades de economia criativa e solidária, além de apoiar a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempreendedores individuais, microempresas e pequenas empresas culturais, associações, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias. Esses investimentos contribuem para manter viva a produção cultural brasileira, sua diversidade de manifestações, ampliando o acesso aos direitos culturais.

A execução desses mecanismos legais que protegem a diversidade cultural, os direitos do conjunto das pessoas que trabalham e fazem cultura, e a democratização do acesso aos bens e meios, deve ser um processo constante, pois impulsiona o crescimento sustentável de um setor vital à preservação da identidade e do patrimônio cultural brasileiro, elementos que nos definem como povo e nação.

A implementação das referidas Leis terá um impacto significativo no setor cultural, permitindo que a economia criativa ocupe com maior potencialidade seu relevante papel como vetor essencial para o desenvolvimento econômico e social do país.

Nossa pluralidade cultural deve ser apropriada e valorada como um ativo de desenvolvimento, ampliando nossa capacidade para o diálogo intercultural em favor da diversidade global e do pleno exercício dos direitos culturais em nosso território, região e no mundo. Afinal, respeitar a diversidade cultural é garantir dignidade humana e promover a Cultura é contribuir para a construção de um planeta mais feliz, justo, criativo e inovador.

Bibliografía

Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, MONDIACULT, 2022.

Constitución de la República Federativa de Brasil, 1988.

Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, UNESCO. París, octubre de 2005

Declaración de Friburgo, 2007.

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.

Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, 2001.

Ley Aldir Blanc N° 14.017, 2020

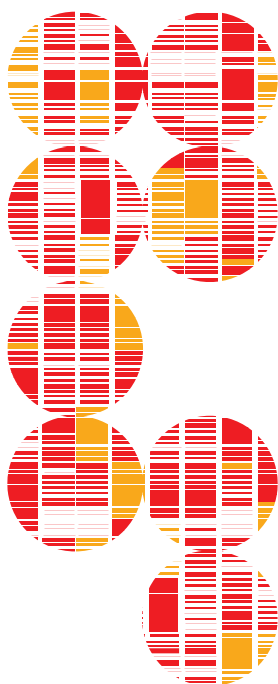
Ley Aldir Blanc 2 N° 14399, 2022

Ley Paulo Gustavo N° 195, 2022

Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1976

CHILE

**FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO
ANTIRRACISTA ATRAVÉS DAS ARTES.
UM CAMINHO PARA A CONSTRUÇÃO DA
CIDADANIA INTERCULTURAL**



Presidente da República

Gabriel Boric Font

Ministro de Cultura, Artes e do Patrimônio

Jaime de Aguirre Höffa

Subsecretaria de Cultura e Artes

Andrea Gutiérrez Vásquez

Chefe de Assuntos Internacionais

Nicolás del Valle Orellana

Chefa de Departamento Cidadania Cultural

Marianela Riquelme Aguilar

Apresentação

O desenvolvimento cultural é uma condição transversal para o fortalecimento de territórios e comunidades no Cone Sul, como também para a promoção de uma convivência social baseada na dignidade, na justiça e na solidariedade.

Neste sentido, a diversidade cultural é um pilar fundamental da vida social do nosso país e -ao mesmo tempo- um horizonte democrático que visa garantir o pleno exercício da identidade, da diversidade e da diferença dos povos e comunidades, colocando no centro uma participação ativa na vida artística e cultural.

Para o nosso país, a democracia cultural constitui para o nosso país como um paradigma e uma linha de trabalho de larga data, o que implica reconhecer e observar as condições históricas de desigualdade que marcaram a vida cultural dos territórios, para assim transformar os modos e pensar em mecanismos que permitam corrigir essas condições.

E uma das principais ferramentas para alcançar essa transformação é a instalação de uma perspectiva intercultural transversal nas políticas culturais, um desafio que implica a valorização, o resgate e o reconhecimento da diversidade cultural em defesa da democracia, da integração e da cooperação

Quando os povos dialogam, significa que há comunidades que se fortalecem, aproximando-nos a um acordo entre culturas e sociedades, ratificando assim o nosso fervente compromisso com a proteção e promoção da diversidade de expressões culturais.

Para conseguir este objetivo, é necessário integrar a perspectiva intercultural nas políticas culturais e avançar na educação antirracista, contribuindo à construção de uma cidadania intercultural com o propósito de proteger e promover a diversidade das expressões interculturais.

Jaime de Aguirre Höffa
Ministro de Cultura, Artes e do Patrimônio

FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA ATRAVÉS DAS ARTES. UM CAMINHO PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA INTERCULTURAL

Autora

Natascha Diharce Böser
Profissional Programa Interculturalidade e Inclusão de Migrantes

Colaboração

Rocío Errazquin Díez
Coordenadora de Assuntos Multilaterais

Hugo Provoste Valdebenito
Jornalista Unidade de Conteúdos e Difusão do Departamento
Cidadania Cultural

Introdução

No âmbito da promoção e proteção da diversidade das expressões culturais, o Ministério das Culturas, das Artes e do Patrimônio apostou à visibilidade das manifestações artísticas e culturais das comunidades migrantes, contribuindo assim para a criação de estratégias de inclusão e espaços de encontro entre as populações migrantes e a chilena. No entanto, parece relevante projetar linhas de trabalho que abordem as causas estruturais dos processos de exclusão, como o racismo; e é aqui que entra a proposta de formação em Educação Antirracismo desenvolvida pelo Departamento de Cidadania Cultural e pelo Departamento de Educação em Artes e Cultura.

O Terceiro Relatório Periódico Quadrienal do Estado do Chile da Convenção sobre a Promoção e a Proteção da Diversidade das Expressões Culturais Culturales (Unesco, 2005)¹⁸, apresenta alguns desafios nesta área, entre os quais se destaca a necessidade de “avançar em questões de inclusão das comunidades migrantes para reduzir os preconceitos gerados em relação às diferenças” ” (Ministério das Culturas, das Artes e do Patrimônio, 2020, p.144)

18 Quadrennial Periodic Report Chile 2020: <https://es.unesco.org/creativity/governance/periodic-reports/submission/6629>. Data de consulta 12 de dezembro de 2022.

Precisamente, falar de inclusão implica a revisão e a superação de certas barreiras, como os preconceitos e estereótipos, que podem ser abordados tanto desde a divulgação de práticas artísticas e culturais de artistas e comunidades migrantes, como através da reflexão com o público em geral.

A este respeito, Tubino sugere que “as políticas de inclusão da diversidade - leia-se ações afirmativas- devem ser complementadas com políticas de convivência intercultural ou de **interculturalidade para todos** que promovam a construção de uma cidadania intercultural tanto nos discriminados quanto nos que discriminam”(s.d. p.2). Por um lado, trata-se de distribuir recursos para a gestão de iniciativas próprias de comunidades migrantes; e por outro, de promover ações com a sociedade de acolhimento para erradicar qualquer forma de discriminação contra estes grupos culturais. Tudo isso, com o propósito de que a “interculturalidade permeie à sociedade como um todo a fim de desenvolver competências culturais em relação à diversidade”. (Loncón Antileo, Castillo Sánchez, & Soto Cárcamo, 2016, p. 67)

Desde esta perspectiva, avançar para a construção da cidadania intercultural implica desenvolver competências interculturais, entendidas como atitudes, conhecimentos e habilidades para conviver no constante reconhecimento da diversidade cultural e, assim transformar as iniquidades em oportunidades para todos os grupos culturais. Nesta mesma linha, e tal como sugerem as orientações do Terceiro Relatório Periódico Quadrienal do Estado do Chile da Convenção sobre a Promoção e a Proteção da Diversidade das Expressões Culturais (Unesco, 2005), é imperativo “promover a interculturalidade na cidadania com ênfase no trabalho que se realiza em espaços educativos formais e não formais” (Ministério das Culturas, das Artes e do Patrimônio, 2020 p. 154)

Educação Artística e enfoque intercultural

Desde o Mincap¹⁹ foi proposto o início de um trabalho de articulação da abordagem intercultural com as comunidades migrantes e agentes educativos. Como resultado surgiu um projeto-piloto que envolveu a participação de artistas-pedagogas e pedagogos, professores e uma artista afro-colombiana, com a finalidade

19 Mincap: abreviatura para referir-se ao Ministério das Culturas, das Artes e do Patrimônio, do Chile.

de refletir sobre o racismo e aprofundar sobre a perspectiva intercultural em contextos educativos.

Assim, foi proposta uma articulação entre dois programas desta Instituição: o programa Promoção da Arte na Educação - ACCIONA- e o programa Interculturalidade e Inclusão de Migrantes. ACCIONA é um programa de Educação Artística, implementado nos estabelecimentos de ensino de todo o Chile, e cujo objetivo é “aumentar a participação ativa dos estudantes nos processos de ensino-aprendizagem através da cultura e das artes e assim reforçar suas capacidades sócio-afetivas, desenvolver a sua criatividade e valorar o seu patrimônio cultural local²⁰”. Uma das principais características é a promoção de diversas abordagens, entre as quais se destaca a interculturalidade. E por sua vez, o programa de Interculturalidade e Inclusão de Migrantes, que busca “reduzir a diferença na participação cultural dos migrantes a partir de uma estratégia que torne visíveis as suas expressões e manifestações artísticas e sensibilize a população chilena sobre as expressões artísticas migrantes”²¹.

Esta iniciativa foi realizada no âmbito dos compromissos estabelecidos no segundo Plano Nacional de Direitos Humanos, definindo-o da seguinte maneira: “sensibilização e formação na abordagem intercultural com professores, artistas / educadores, mediadores de espaços culturais e organizações culturais comunitárias para a concepção e implementação de projetos artístico-culturais que promovam a igualdade e a não discriminação das comunidades migrantes”.

Isto, associado ao Eixo de Igualdade, no capítulo de Pessoas migrantes e refugiadas, crianças e adolescentes, cujo alvo é “promover a igualdade e prevenir a discriminação arbitrária de pessoas pertencentes a grupos de proteção especial, adotando medidas que contribuam ao estabelecimento de uma cultura de respeito pelos direitos humanos nas esferas pública e privada”.

Formação em educação antirracista

Os principais objetivos das sessões de formação foram: fornecer ferramentas pedagógicas antirracistas para o ensino nas escolas chilenas a educadores e ar-

20 <https://www.cultura.gob.cl/educacion-artistica/acciona/#:~:text=El%20prop%C3%B3sito%20general%20del%20programa,valorar%20su%20patrimonio%20cultural%20local>.

21 Orientações Programáticas 2022 - Programa Interculturalidade e Inclusão de Migrantes.

tistas através das artes e da cultura como eixo transversal de aprendizagem, com o objetivo de analisar criticamente a instalação do racismo na educação, na cultura e na arte. Compreender a relação entre educação e arte no processo de ensino-aprendizagem para pensar o trabalho pedagógico a partir de parâmetros não ocidentais. Reconhecer os processos artísticos dos migrantes, afrodescendentes e mapuches ocorridos nestes territórios.

Uma das principais características deste trabalho é que as sessões de formação foram coordenadas pelo Programa ACCIONA e pelo Programa Interculturalidade e Inclusão de Migrantes e concebidas, executadas e avaliadas por Julieth Micolta, uma mulher afroboготana e migrante que vive no Chile há sete anos, criadora do projeto educativo antirracista Bemba Colorá²², educadora popular e estudante de Sociologia. A Julieth no seu caminho migratório tem pesquisado sobre o racismo na educação e tem desenvolvido um trabalho com crianças e mulheres afrodescendentes e migrantes. Além disso, tem realizado diversas propostas educativas interculturais que visam à conscientização antirracista e o resgate da memória afrodispórica em contextos educativos.

Metodologia

As sessões foram realizadas virtualmente para conseguir uma maior participação das diversas comunidades. Em termos metodológicos, foram utilizadas estratégias de aprendizagem participativa, onde prevaleceu a experiência das e dos participantes na área de educação artística. Da mesma forma, foram combinados elementos de gamificação²³ através das aplicações online como o Padlet e o Kahoot, que permitiram a construção do conhecimento coletivo, diálogos e encontros, bem como a revisão dos resultados das sessões anteriores.

Participantes das sessões de formação

Os seis módulos de formação foram divididos por regiões definidas como prioritárias no país. Assim, o primeiro bloco de sessões contou com a participação de

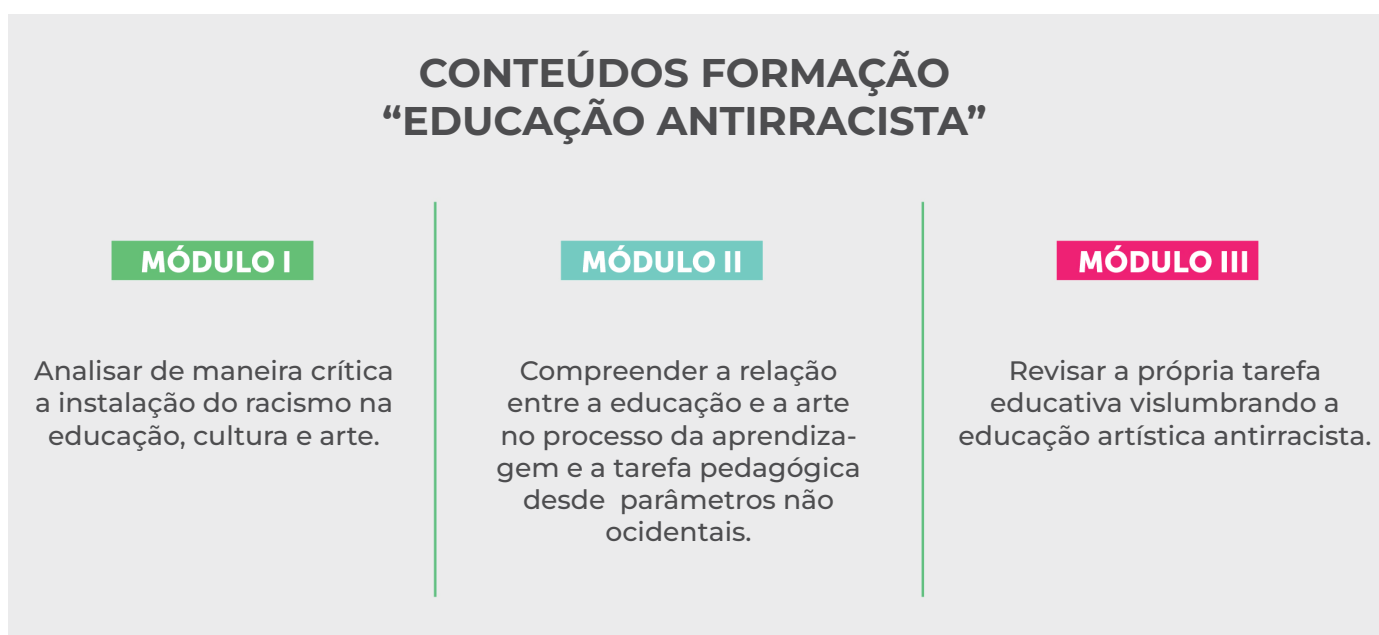
22 Projeto Bemba Colorá: <https://bemba.cl/>

23 Gamificação: A Gamificação é uma técnica de aprendizagem que traslada a mecânica dos jogos ao âmbito educativo-profissional com o objetivo de conseguir melhores resultados, seja para absorver alguns conhecimentos, melhorar alguma habilidade, ou recompensar ações concretas, entre outros muitos objetivos.. <https://www.educativa.com/blog-articulos/gamificacion-el-aprendizaje-divertido/>

professores e artistas –educadores/residentes nas regiões de Arica e Parinacota, Região de Tarapacá e Região de Antofagasta. E no segundo bloco, participantes das regiões de Biobío, La Araucanía, Los Ríos e Los Lagos.

Conteúdos da formação

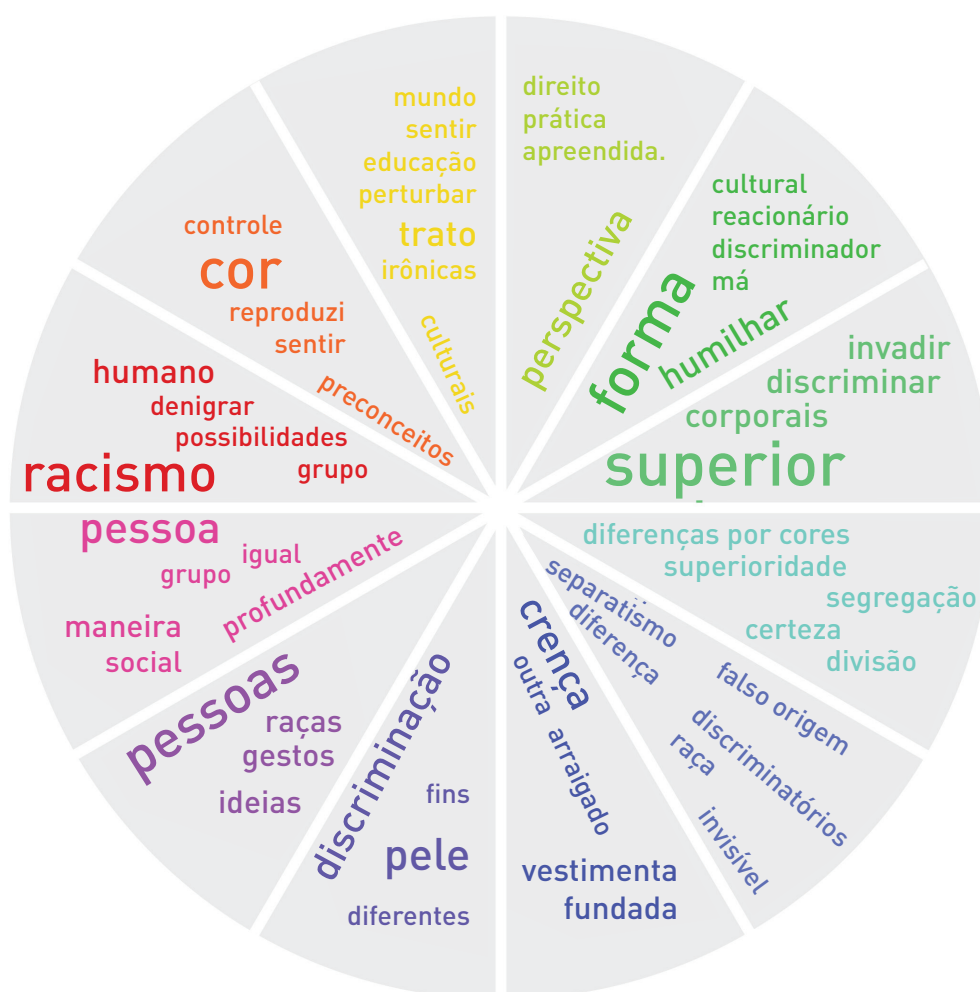
Quanto aos temas abordados, estes foram divididos em três módulos:



Módulo I: Racismo na educação, cultura e arte.

O objetivo desta unidade foi analisar criticamente a instalação do racismo nos setores da educação, da cultura e das artes, salientando a importância de identificar atitudes racistas em contextos educativos, que possam surgir através da negação do racismo e a folclorização. A seguir, são compartilhadas algumas ideias associadas ao racismo extraídas das sessões de formação.

Tabela 1 “Algumas ideias associadas ao racismo” (Elaboração própria)



Para Riedemann e Stefoni, o racismo é reconhecido como “qualquer expressão verbal ou ação na qual se manifeste a crença de que é válida a classificação dos seres humanos em raças” (2015, p. 195). Portanto, o convite é a olhar de forma mais ampla para as diversas formas em que ele se manifesta. Precisamente nesse sentido, é importante apontar a negação do racismo surgiu como um dos principais obstáculos para sua erradicação. Nas palavras de Van Dijk, “uma das principais características do racismo é a sua negação, que pode ser tipicamente ilustrada em expressões como “não tenho nada contra os negros, mas...” (1992, p.87), o que mostra que o reconhecimento dos discursos que negam o racismo é o ponto de partida para gerar uma aproximação a uma educação antirracista.

Por outra parte, é comum identificar práticas educativas com tendências folclorizantes, onde estudantes de diversas nacionalidades são convidados a exibir em feiras escolares ou festividades algum elemento que carregue a identidade de suas comunidades. Nesse sentido, Romero (2016), define a folclorização como “um dispositivo que ativa a alienação das representações e as práticas desconectando-as de suas histórias e processos locais, produzindo sua fragmentação, sua discriminação e a seleção de algumas, muito poucas, para envolvê-las com outra estética que até se tornem em mercadoria” (p.19). E, por isso, é fundamental acompanhar esses processos pedagógicos com reflexões na comunidade educativa, que permitam compreender os contextos de origem dessas práticas artísticas e/ ou culturais.

Módulo II: Educação antirracista I

O propósito deste módulo foi compreender as oportunidades que emergem entre a educação e as artes nos processos de aprendizagem, desde uma perspectiva intercultural. E para abordar esta temática participaram desta sessão duas artistas: Ülcha Huelchumil²⁴, educadora, artista e filósofa da pedagogia mapuche; e de Sara Dorado, artista migrante colombiana, dedicada ao trabalho com artes visuais em estabelecimentos de ensino na cidade de Viña del Mar. Esta sessão, explorou os conceitos associados à educação antirracista e à contribuição das artes para sua abordagem.

Neste contexto, a educação antirracista foi definida como “uma iniciativa pedagógica que visa à transmissão de conhecimentos e competências para combater o racismo, a xenofobia e a violência” (Riedemann & Stefano, 2015, p. 197). E, desde esta perspectiva, as diversas linguagens artísticas representam uma ferramenta específica para instalar reflexões e indagar nas formas de transformar as desigualdades vigentes nos contextos educacionais. Em última instância, as artes facilitam a expressão de diversas experiências, visões, e identidades, individuais e coletivas. Nas palavras de López-Ganet (2021), “as pessoas precisam se expressar e se aproximar das histórias umas das outras também através das emoções”. As artes são um espaço de trabalho ideal para isso, sempre que sejam entendidas de uma forma aberta, flexível, heterogênea e verdadeiramente

24 Ülcha Huelchumil: <https://bemba.cl/acerca-de/>

diversa” (pp.95-95). Deste modo, as convidadas propuseram algumas ferramentas essenciais para a construção de uma educação antirracista:

- Deve ser um processo anticolonial
- Deve ter a voz migrante
- É necessário conectar com o interior
- As emoções são parte do enquadramento antirracista
- O antirracismo também trabalha com a justiça
- As conversas abertas são vitais para a construção de uma memória coletiva e significativa.²⁵

Módulo III: Educação antirracista II

Uma vez revisados alguns conteúdos vinculados com o racismo, e o aporte das artes para sua abordagem, durante o último dia foi proposta uma instância de reflexão sobre o próprio trabalho artístico-pedagógico dos participantes, e a partir daí, foram elaboradas algumas propostas de educação antirracista para serem aplicadas no âmbito da educação artística.

25 Propuestas de artistas invitadas a las capacitaciones: Ülcha Huelchumil y Sara Dorado.

Tabela 2: Proposta de educação artística antirracista

ÁREA ARTÍSTICA	QUE FERRAMENTAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA POSSO IMPLEMENTAR NO MEU TRABALHO ARTÍSTICO EDUCATIVO?	CÓMO IMPLEMENTÁ-LAS?	PARA QUE?
Desenho / Artes plásticas	Incorporação de diferentes formas de corpos, peles, cabelos.	Convidar diversos referentes artísticos e levar lápis para pintar de diferentes cores. Explicar que não há uma “cor de pele” e integrar no diálogo a questão da diversidade de peles.	Para que as crianças possam reconhecer na sua aprendizagem diferentes formas físicas, assim poderão se reconhecer nelas e reconhecer a seus colegas.
Cine e audiovisual	Visionado de artistas de diversas culturas, Youtubers e cinema latino-americano.	Criar vídeos de acordo com os interesses dos estudantes.	Promover a multiculturalidade e a diversidade de expressões artísticas.
Teatro	Ampliar as referências artístico-culturais na área da representação teatral.	Trazer referentes diretores, dramaturgos desde outras cidades.	Reconhecer a existência de outras formas de representação teatral, provenientes de diversas comunidades culturais.
Disciplina da Linguagem	Conhecer novas corporeidades, tradições, contos, lendas.	Recopilar diversos textos de diferentes povoados, lugares, apresentando sua relação entre os povos e suas histórias.	Reconhecer diferenças e similitudes nas tradições e histórias de diversos povos.

Conclusões

Uma das principais conclusões durante o processo de formação em educação antirracista tem sido que, para conseguir o desenvolvimento de competências interculturais na educação artística, é preciso identificar as crenças, atitudes, conhecimentos e referências de cada pessoa que trabalha em contextos artísticos e educativos, pois podem estar deslegitimando as experiências e os sentimentos de diversos estudantes e dos seus contextos culturais. Portanto, é necessário promover momentos para refletir e a discussão crítica dentro dos estabelecimentos de ensino em relação à diversidade cultural presente, a fim de conduzir propostas conjuntas que favoreçam o reconhecimento das subjetividades e do desenvolvimento pleno dos estudantes como sujeitos de direito (Tijoux, 2016, p.279).

Por conseguinte, desde o Mincap se vê a necessidade de continuar desenvolvendo uma linha de trabalho nos âmbitos da educação e da interculturalidade, com a participação de artistas, pedagogos, docentes, mediadores e gestores culturais, quem trabalham com crianças e pessoas pertencentes a grupos culturais historicamente discriminados.

Como vimos, a formação em competências antirracistas e interculturais é um ponto de partida para a construção de cidadanias que reconheçam a diversidade cultural e que deve ter relevância no contexto das Políticas Culturais, enquadradas na democracia cultural, colocando um novo desafio: passar da noção de cidadania cultural para a ideia de cidadanias interculturais.

Finalmente, com base na experiência partilhada neste caderno, parece prioritário consolidar o conceito da perspectiva intercultural no quadro de vários programas sociais, que articulam culturas, artes e educação, com o objetivo de “integrar o apoio e o acompanhamento às comunidades imigrantes e dos povos originários como um componente em todas as iniciativas programáticas das políticas culturais” (Tijoux, 2016, pp.274-275).

Referências

Loncón Antileo, E., Castillo Sánchez, S., & Soto Cárcamo, J. (2016). Barreras a la Interculturalidad en el sistema educativo chileno. Informe final. Encargado por UNICEF y MINEDUC. Santiago.

López-Ganet, T. (2021). Transformando la educación desde el antirracismo, los feminismos negros y la comunidad afro por medio de las artes. *Observar. Revista Electrónica De Didáctica De Las Artes*, 84-103.

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. (2020). Tercer Informe Periódico Cuadrienal del Estado de Chile - Convención para la promoción y protección de la diversidad de expresiones culturales, UNESCO 2005.

Riedemann, A., & Stefoni, C. (2015). Sobre el racismo, su negación, y las consecuencias para una educación anti-racista en la enseñanza secundaria en Chile. *Polis, Revista Latinoamericana*, 191-216.

Romero, J. (2016). De la extirpación a la folklorización: a propósito del continuum colonial en el siglo XXI. *Estudios Artísticos: revista de investigación creadora*, 14-36.

Tijoux, M. E. (2016). *Racismo en Chile. La piel como marca de la inmigración*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria S.A.

Tubino, F. (s.f.). Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Recuperado el 12 de diciembre de 2022, de <https://red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/090714.pdf>

Van Dijk, T. (1992). Discourse and the denial of racism. *Discourse & Society*, 87-118.

PARAGUAI

AFRODESCENDENTES: LEI N° 6940



Presidência da Nação

Mario Abdo Benítez, Presidente

Ministro da Cultura

Rubén Capdevila Yampey

Direção Geral do Gabinete

Juan Marcelo Cuenca

Direção de Cooperação Internacional

Teresita Silvero

Direção Geral do Patrimônio

Maricarmen Couchonal

**Direção Geral de Planificação,
Desenvolvimento e Inovação Cultural**

Emilia Esquivel

Direção Geral de Comunicação Estratégica

Gustavo Reinoso

Direção Geral de Assessoria Jurídica

Nathalia Cardozo

**Direção Geral de Diversidade,
Direitos e Processos Culturais**

Humberto López La Bella

**Direção de Formação e
Divulgação da Diversidade Cultural**

Mariela Muñoz Barresi

**Departamento de Expressão, Atividades,
Bens e Serviços Culturais**


Fátima Báez

Equipe Técnica de trabalho

María Luz Saldívar

Fátima Báez

Nadia Riveros



Como Secretaria Nacional da Cultura somos conscientes da maneira como as políticas e as estruturais legais específicas contribuem à consecução dos direitos culturais, da tolerância e do respeito pela diversidade.

Em busca da proteção dos direitos culturais dos afrodescentes no Paraguai, desde o final de 2018 estamos trabalhando com a comunidade afrodescendente e organizações internacionais.

O resultado desta sinergia é a Lei nº6940/2022. Que estabelece mecanismos e procedimentos para prevenir e punir atos de racismo e discriminação contra os afrodescentes. Legitimando assim sua visão do mundo e protegendo seu desenvolvimento e expressão como tal.

Acreditamos firmemente que o crescimento e o fortalecimento da cultura em sua diversidade é o caminho para o sucesso das nações.

**Rubén Capdevila Yampey, Ministro Secretario
Secretaria Nacional de Cultura do Paraguai**

por **Ignacio Telesca**

O dia 20 de julho de 2022 foi um dia muito especial para a comunidade descendente do povo africano no Paraguai e para a sociedade como um todo. Foi aprovada a Lei n° 6940 “que estabelece mecanismos e procedimentos para prevenir e punir atos de racismo e discriminação contra os afrodescendentes”. Não foi fácil, mas o resultado positivo foi alcançado após décadas de luta e fortalecimento mutuo entre as organizações afroparaguaias, a Secretaria Nacional de Cultura, organizações internacionais e pessoas da sociedade civil. Graças a esta lei, novos direitos foram concedidos a uma população historicamente invisível e discriminada.

Assim como no resto do continente americano, os primeiros africanos escravizados chegaram ao Paraguai com os conquistadores no século XVI. O Paraguai não era uma economia escravista, mas uma sociedade com uma população escravizada. Foram os povos originários quem sofreram em primeiro lugar as consequências do trabalho pesado, principalmente nas plantações de erva-mate. Os escravos constituíam um investimento, enquanto os indígenas eram recebidos quase de graça por meio do sistema de encomenda. Apesar disto, até a abolição da escravidão em 1870, a população afrodescendente nunca baixou do 11% e a escravizada nunca caiu para menos de 4% da população total.

Um fato particular dos primeiros tempos da história colonial, é que o Paraguai nunca foi um destino em si para os conquistadores, se não uma base para chegar ao famoso El Dorado, que não era outra coisa que as minas de prata de Potosí. Quando finalmente conseguiram chegar lá atravessando a região do Chaco descobriram que os habitantes de Lima tinham chegado primeiro, razão pela qual, os que provinham de Assunção, deram meia-volta e retornaram à sua base.

Do ponto de vista econômico, o Paraguai não tinha uma riqueza mineral importante, tinha apenas a mão de obra indígena, que começou a ser distribuída em forma de encomenda a partir de 1556. Muitos conquistadores não receberam nem nativos nem terras, foi assim que começou um êxodo da população para os diversos pontos cardeais, dando origem à fundação de novos assentamentos, como o caso de Buenos Aires em 1580.

Também não chegaram novos contingentes de conquistadores europeus às praias de Assunção, o que deu início a um processo de miscigenação generalizada. No início da conquista a miscigenação resultou da violência física e sexual dos conquistadores com as indígenas guaranis, no século XVI e, principalmente no século seguinte, a miscigenação era comum, e a própria coroa espanhola legitimou ao mestiço como espanhol para que pudesse ter todas as prerrogativas deste último. Portanto, censos coloniais não registram a categoria de “mestiço”.

A tradição historiográfica observa essa mestiçagem entre os europeus e índios, mesmo que, as fontes deixam claro que a população afroparaguaia participou também dessa simbiose populacional. O mestiço paraguaio, portanto, tinha o sangue de três continentes nas suas veias e, à medida que o século avançava, chegavam mais pessoas da África do que da Europa, de modo que, e sem medo de contradição, a participação africana se tornava cada vez mais importante no século XVIII.

Ser escravo na América e no Paraguai implicava todo tipo de discriminação, pelo próprio fato da ausência de liberdade. O escravo era considerado uma coisa nas mãos do seu senhor, a violência sofrida pela população africana era severa.

No entanto, no Paraguai ocorreu um fato particular e é que os principais proprietários de pessoas escravizadas eram as ordens religiosas e a própria igreja. Metade da população escravizada pertencia a instituições eclesiásticas e no momento da expulsão dos jesuítas em 1767, estes possuíam um quarto desta população, no seu colégio e fazendas, um total de 1005 pessoas escravizadas.

Há uma tendência de se pensar que o clero tratava melhor à população escravizada, e as fontes documentais sugerem que era o caso, já que os escravos tinham seus próprios espaços de sociabilidade, como as confrarias religiosas, ou a possibilidade de ganhar uma certa quantia de dinheiro, porque lhes era permitido, em certos casos, trabalhar em suas próprias terras.

De fato, logo após a expulsão dos jesuítas, os escravos de propriedade da ordem começaram a serem leiloados, muitos se recusaram a trocar de dono e houve uma revolta de oitenta e cinco no total, liderada por aqueles que tinham uma profissão específica, eram músicos. Mesmo assim, eles ainda eram escravos e

estavam sujeitos às mesmas condições discriminatórias que os demais que sofriam a mesma situação.


Ao longo dos anos, muitos deles foram ganhando sua liberdade e conformaram uma sociedade de afrodescendentes livres. No entanto, a coroa espanhola os sobrecarregou com a obrigação de pagar tributos que, a maioria dos casos, eram impossíveis de pagar, como resultado tiveram que procurar a ajuda de quem pudesse pagar essa taxa por eles. Nas palavras do famoso Felix de Azara, no final do século XVIII, que esta proteção, não era outra coisa mais que uma forma disfarçada de escravidão.

Contudo no Paraguai ocorreu um fato sem precedentes em outras regiões da América. Em 1741, o governo criou com esta população afrodescendente livre, um vilarejo, Emboscada, que, como seu próprio nome sugere, tinha a função de servir como uma barreira contra a entrada da população indígena do Chaco. Emboscada persiste até hoje e é o local com maior presença afrodescendente no Paraguai.

A independência, em 1811, não trouxe maiores mudanças para a população afrodescendente, seja ela escravizada ou livre. Somente em 1842 foi aprovada a Libertad de Ventres (Liberdade de Ventres) pela qual os filhos e filhas das mulheres escravizadas que nascessem a após o 1º de janeiro de 1843 seriam considerados como libertos e teriam que servir a seus senhores até atingirem 24 anos para as mulheres e 25 para os homens.

Infelizmente, a Guerra contra a Tríplice Aliança que colocou o Paraguai contra o Brasil, a Argentina e o Uruguai (1864-1870), veio antes do que a carta de liberdade. Nessa mesma guerra, existiram dois batalhões conformados por afroparaguaios. Após a guerra, o Paraguai teve que se reconstruir e uma nova Constituição foi adotada em 1870, na qual no artigo 25, a escravidão foi definitivamente abolida.

Parece que a memória da própria existência da população afrodescendente, discriminada até 1870, se tornou invisível nos relatos históricos e identitários, a ponto de, quando o centenário da independência foi celebrado em 1911, o Álbum Gráfico que foi publicado para essa comemoração não hesitou em afirmar que “o pigmento negro não escurece nossa pele”. O sangue africano já não participava



da mestiçagem, e o “negro” era simplesmente um fato decorativo na narrativa historiográfica, deixando esquecido que, de acordo com o censo de 1799, mais do 50% da população que vivia em Assunção era de descendência africana. Como em outros países, repetia-se incessantemente que “não havia negros no Paraguai”.


Em direção à visibilização dos afrodescendentes, foi na comunidade **Kamba Kua**, (da língua guarani Cova de Pretos) na década de 1960, que um grupo de afrodescendentes iniciou sua luta pelo reconhecimento. Tudo começou com a luta pela terra, e em seguida, a música e a dança apareceram publicamente. O que, aos olhos da população, se apresentava como algo exótico e pitoresco, era claramente uma luta política pela identidade, pelo reconhecimento.

Uma aproximação com a organização Mundo Afro do Uruguai, a participação em congressos internacionais e o aumento do interesse da comunidade, fizeram com que a organização crescesse e fosse levada em consideração pelo Estado e por organizações internacionais.

Em 2006, juntamente com a organização de Emboscada, realizaram o primeiro censo da população afrodescendente no Paraguai. Uma mensagem clara: não somos poucos, estamos aqui. O censo não apenas contou as pessoas, mas também colheu dados sobre saúde e educação. Claramente, o censo foi o ponto de partida, o gatilho para a luta por uma lei específica que reconhecesse à população afrodescendente como sujeito de direitos.

O lento processo rumo à Lei 6940

A primeira conquista da comunidade afroparaguaia foi a aprovação da Lei 5464 do ano 2013 que declara “o dia 23 de setembro de cada ano como o dia da Cultura Afroparaguaia”. Parece pouco, mas foi um passo fundamental, pois o próprio Estado reconheceu a existência da comunidade afroparaguaia com uma cultura específica digna de ser celebrada. As organizações tinham clareza de que esse era um primeiro passo para uma lei específica e conseguiram elaborar um projeto de lei que foi apresentado no final de 2019 pelo senador Blas Llano. O projeto de lei tinha um título breve, mas concreto: “que reconhece a população afroparaguaia como uma minoria étnica”.




Em seguida, o projeto foi ampliado para que o próprio título incluísse tudo o que estava sendo solicitado: “que reconheça a população afrodescendente do Paraguai como minoria étnica e incorpore o legado das comunidades afrodescendentes na história, sua participação e contribuições na conformação da nação, em suas diversas expressões culturais (artes, filosofia, conhecimento, costumes, tradições e valores) ”.

Infelizmente, essa seção da lei era restrita e só atendia a uma das exigências das organizações: “que estabelece mecanismos e procedimentos para prevenir e sancionar atos de racismo e discriminação contra as pessoas descendentes do povo africano no Paraguai”. Não foi essa a única mudança, a redação final foi removida do texto final e o referido à criação de um plano de saúde para as comunidades afroparaguaias bem como a proposta de promover o acesso de afroparaguaios e afrodescendentes aos órgãos da administração pública. Finalmente, a nova redação, que se concentra principalmente em atos de discriminação, foi aprovada no Senado em 20 de julho de 2021.

Esperava-se que, na outra Câmara, a Câmara de Deputados, fosse possível reincorporar o que havia sido excluído, mas não foi o caso. Em outubro desse mesmo ano, o projeto de lei foi rejeitado e retornou à Câmara de origem. Nessa circunstância, ou o projeto de lei enviado pelos senadores era ratificado ou todo o processo era iniciado novamente.

As organizações deram prioridade à aprovação da Lei, mesmo que esta não contivesse tudo o que tinha sido solicitado. Foi ratificada uma vez mais na Câmara de Senadores em março de 2022. Na Câmara dos Deputados, não voltou a ser tratada, mas foi ratificada devido à expiração dos prazos. Desta maneira, o Presidente da República Mario Abdo Benítez assinou-a em 20 de julho desse ano aparecendo nesse mesmo dia no Boletim Oficial nº140.

Um novo caminho a percorrer, a experiência no Parlamento, foi um sinal de alerta para as organizações, nada seria fácil. A comprovação veio quase de imediato. O boletim de voto para o recenseamento de 2022 apagou de um golpe só a pergunta sobre a auto-identificação afro, uma pergunta que tinha estado presente no boletim de voto de 2012. As razões apresentadas foram múltiplas, mas o que é claro é que todos os níveis da administração pública ainda não foram penetrados.



No entanto, as organizações não se desanimaram e já apresentaram um projeto de regulamentação da Lei 6940/2022, que está em vias de ser aprovado pela Assessoria Jurídica da Presidência. Abre-se um novo cenário jurídico e de legitimidade para as comunidades de origem africana no Paraguai. Os passos feitos são muito importantes e embora o caminho não seja simples, sabemos que não há volta atrás. A sinergia criada com as instituições estatais, internacionais e parte da sociedade civil poderemos afiançar o que foi alcançado e lutar por mais direitos.

As imagens apresentadas abaixo são da exposição “**Los invisibles, pardos, negros, negros, mulatas. Escravidão no Paraguai**”. Arquivo Nacional de Assunção, Paraguai.



Bibliografía

Argüello, María (1999), *El rol de los esclavos negros en el Paraguay*. Asunción, Centro Editorial Paraguayo

Boccia Romañach, Alfredo (2004), *Esclavitud en el Paraguay. Vida cotidiana del esclavo en las Indias Meridionales*, Asunción, Servilibro.

Bodin, Capucine (2006), “Esclaves, pardos et milices au Paraguay XVIIe-XIXe siècles” (Stella Sandro y Bernard Carmen, *D’esclave à soldat. Miliciens et soldats d’origine servile, XIIIe-XXe siècle*, Paris, L’Harmattan, pp. 341-364)

Cooney, Jerry (1994), “La abolición de la esclavitud en el Paraguay”, en Jerry Cooney y Thomas Whigham (comp.) *El Paraguay bajo los López. Algunos ensayos de historia social y política*, Asunción, CPES, pp. 25-38


Cooney, Jerry (1995) “El afroparaguayo”, en Luz Martínez Montiel (coord.), *Presencia africana en Sudamérica, México*, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pp. 449-525]

Medina, Nancy y José Carlos Medina (2009), “Una deuda histórica en la construcción de la ciudadanía paraguaya. La afirmación de los derechos de afrodescendientes en el Paraguay”, Codehupy, *Derechos Humanos en Paraguay 2009*, Asunción, Codehupy, pp. 221-227.

Pla, Josefina (1972), *Hermano Negro. La esclavitud en el Paraguay*, Madrid, Paraninfo.

Telesca, Ignacio (2007), “Afrodescendientes en el Paraguay. Invisibilidad, mestizaje y la narración de la historia nacional” (*Estudios Paraguayos*, XXV: 1-2, pp. 77-86)

Telesca, Ignacio (2010), “Sociedad y afrodescendientes en el proceso de independencia del Paraguay”, en MALLO, Silvia e TELESKA, Ignacio –editores– “Negros de la patria”. *Los afrodescendientes en las luchas por la independencia en el antiguo Virreinato del Río de la Plata*, SB, Buenos Aires, pp. 149-170.

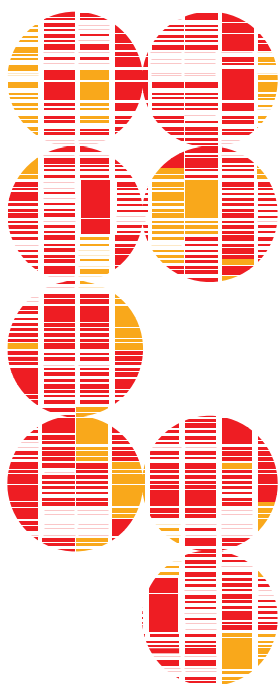


Telesca, Ignacio (2020), “Afrodescendientes: esclavos y libros”, en Ignacio Telesca (coord.), Nueva Historia del Paraguay, Buenos Aires, Sudamericana, pp. 399-418.

Williams, John Hoyt (1974), “Esclavos y pobladores: observaciones sobre la historia parda del Paraguay en el siglo XIX”, Revista Paraguaya de Sociología, 31, pp. 7-27.

URUGUAI

¿REFUGIADOS OU MIGRANTES
ECONÔMICOS? OS VENEZUELANOS
NO URUGUAI ANTES E DURANTE
A EMERGÊNCIA SANITARIA



Presidente da República Oriental do Uruguai

Luis Lacalle Pou

Ministro de Relações Exteriores

Francisco Bustillo

**Representante permanente de Uruguai
ante o MERCOSUL**

Enrique Ribeiro

Ministro de Educação e Cultura

Pablo da Silveira

Subsecretaria do Ministério de Educação e Cultura

Ana Ribeiro

Diretora Nacional de Cultura

Mariana Wainstein

Diretora de Cooperação Internacional e Projetos


Agustina Cabrera

**Coordenador do Departamento de Internacionalização
da cultura uruguaia**

Facundo de Almeida

**Coordenação do MERCOSUL Cultural para
a República Oriental do Uruguai**


Victoria Contartese



O Uruguai sempre foi um país de imigração. De fato, em determinadas épocas, teve uma das taxas mais elevadas de imigrantes em relação à população total de que há registro. Mas a questão não é apenas de caráter quantitativo. Na realidade, isso é o que menos importa. O verdadeiramente valioso, é o que constitui um motivo de saudável orgulho para os uruguaios, é que esse imenso fluxo foi incorporado à convivência social sem grandes traumas ou conflitos. No Uruguai nunca existiram guetos, nem violência étnica organizada, nem discriminação lingüística ou religiosa. Aqueles que chegaram desde outras terras, foram pacificamente incorporados ao nosso modo de vida e logo se sentiram parte da sociedade que os tinha acolhido. Neste duplo sentido, quantitativo e qualitativo, o caso da imigração no Uruguai é um caso de sucesso à escala mundial. Não somos os únicos no MERCOSUL em poder sentir este legítimo orgulho.

Tal como há 100 ou 150 anos, o Uruguai volta a ser o país um país de acolhida. Os que chegam atualmente (maiormente venezuelanos e cubanos) o fazem pelas mesmas razões que levaram aos imigrantes do passado: procuram oportunidades e liberdade. Felizmente, o Uruguai continua oferecendo ambas. Nossa legislação favorável à imigração, nossa economia em crescimento, a nossa educação pública, o nosso sistema de proteção social e o caráter hospitaleiro da nossa população criam as condições para o progresso através do esforço e do exercício da responsabilidade pessoal. Nosso sistema político estável e civilizado oferece democracia, segurança jurídica, tolerância e liberdades àqueles que não as encontram nos seus países de origem.

Freqüentemente os imigrantes expressam sua gratidão para com o país que os acolhe. Mas nós também somos gratos com eles. Cada imigrante que chega, traz consigo



sua história pessoal e familiar, os seus valores, a sua cultura e o dinamismo que advém dos seus desejos de melhorar. Tudo isto nos ajuda a ter uma sociedade mais rica, mais diversificada, mais viva.

Desde as suas origens até hoje, a sociedade uruguaia é uma sociedade melhor graças àqueles que chegam para se incorporar à nossa vida quotidiana. Todos são muito bem-vindos.

Dr. Pablo da Silveira
Ministro de Educação e Cultura

Refugiados ou migrantes econômicos? Os venezuelanos no Uruguai antes e durante a emergência sanitária

Por **Silvia Facal**

Introdução

Desde meados da década de 1960 até 2008 inclusive o Uruguai teve saldos migratórios consistentemente negativos. Essa situação foi revertida a partir de 2009 com um significativo retorno de uruguaios que viviam no exterior e também graças à chegada de novos contingentes migratórios provenientes de países não tradicionais da região como Peru, Paraguai, República Dominicana e, de forma, mas recente, Cuba e Venezuela. A maioria desses novos imigrantes foi levada a escolher o nosso país principalmente por motivos econômicos. No entanto, outros, como os venezuelanos, também o fizeram por motivos políticos, sendo considerados como refugiados no mais estrito sentido da palavra por organizações internacionais como a Organização Internacional das Migrações (OIM) e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)

De 2013 até o começo de 2020, quando foi decretada a emergência sanitária no Uruguai²⁶, a chegada ao país de venezuelanos tem aumentado constantemente. Isto é atribuído a fatores como a política migratória do Uruguai, incorporada na Lei de Migração nº 18.250 de 2008 e na Lei de Residências do MERCOSUL nº 19254 de 2014. Ambas as leis têm facilitado a chegada de migrantes e sua rápida inserção principalmente se forem cidadãos de países do MERCOSUL como é o caso dos venezuelanos.

Esse movimento migratório regional vem ocorrendo no âmbito do atual mundo globalizado, onde estão ocorrendo situações não apenas de desajuste do sistema capitalista, mas também situações de perseguição de vários tipos

Desenvolvimento

Para entender as dimensões atuais do processo migratório venezuelano no Uruguai é necessário apresentar seus perfis sociodemográficos e laborais enqua-

26 A data exata foi 13 de março de 2020.

dados nas seguintes variáveis: ano de chegada, destino, gênero, idade, nível de estudos e inclusão laboral.

Data de chegada e destino

De acordo com os números da OIM e levando em consideração também os registros do ACNUR, no último relatório publicado em abril de 2021, 5.642.960 venezuelanos residem fora do seu país²⁷.

No Uruguai, até 2012, inclusive, os venezuelanos passaram praticamente despercebidos nas estatísticas oficiais uruguaias, como pode ser visto na tabela a seguir.

Tabela 1. Saldos migratórios de venezuelanos no Uruguai (2012-2020)

Ano de entrada	Diferença entre entrada e saída de venezuelanos
2012	177
2013	1.007
2014	1.274
2015	2.258
2016	2.758
2017	2.691
2018	3.847
2019	2.872
2020 ²⁸	1.547
Total	18.431

Fonte: Elaboração própria com dados proporcionados pela DNM, 2021.

A partir de 2013, começou a haver uma chegada de certa relevância de venezuelanos e, especialmente, à capital do país, Montevideu, onde estão centralizados

27 Esse número representa a soma de migrantes, refugiados e solicitantes de asilo venezuelanos informados pelos diversos governos anfitriões. Não se trata de uma cifra exata, mas inclui um grau estimativo. Como muitas das fontes governamentais não consideram os venezuelanos sem um status migratório regular, é provável que o número total seja ainda maior. (ACNUR 2021).

28 Tudo indicava que, durante 2020, devido à pandemia da Covid-19 e ao fechamento de fronteiras decretado nos países da região, dos quais o Uruguai não escapou, haveria uma forte desaceleração na entrada de venezuelanos no país. No entanto, no ano passado, 1.547 venezuelanos (DNM, 2021) solicitaram residência no Uruguai. Esse número só foi superado pelos 6.811 argentinos que o fizeram (DNM, 2021).



os meios de produção econômica do país e também onde são realizados os procedimentos de residência MERCOSUL conforme ao estabelecido na Lei 19.254 de 2014, juntamente com a denominada área metropolitana.²⁹

A mencionada Lei, a 19.254, complementa à Lei 18.250 de 2008 sobre “Migração”, visa facilitar a residência permanente no país a estrangeiros que sejam cônjuges, coabitantes com procedimentos judiciais realizados no Uruguai, pais e /ou irmãos de cidadãos uruguaios e cidadãos dos Estados Membros e Associados do Mercosul (Junta Nacional de Migración, 2020).

Há vários motivos para a chegada de venezuelanos ao país. Além das situações econômicas, destacam-se a situação política e a grande instabilidade social vivida na Venezuela após a morte de Hugo Chávez em 5 de março de 2013, e o ascensão de Nicolás Maduro ao poder. Até 2008, inclusive, a Venezuela viveu um período de bonança econômica, que chegou ao fim em 2009, devido aos problemas financeiros do país (Paez, 2015). A partir desse momento, o conflito social e a violência começaram a aumentar, seguidos de fortes represálias contra os opositores do governo (Castillo Castro e Raguant Álvarez, 2017), que se intensificaram com a morte de Hugo Chávez e afundaram ao país em um profundo colapso econômico acompanhado de uma grande tensão social e política.

Gênero e idade

Para conhecer sobre a distribuição por gênero, desde o ponto de vista binário de masculino e feminino, dos migrantes venezuelanos no Uruguai, usamos os resultados das Pesquisas Contínuas de Lares (Encuestas Continuas de Hogares-ECH) realizadas anualmente pelo Instituto Nacional de Estadística (INE), analisadas para este análise, e da pesquisa realizada entre 2018 e 2020 pela Cátedra

²⁹ Uma concentração de venezuelanos também é observada, embora em menor escala, nos departamentos de Maldonado e Canelones. Este último é o departamento vizinho de Montevidéu e conta com uma infraestrutura semelhante à da capital, e várias de suas localidades funcionam como áreas de dormitório de Montevidéu ou como epicentros de trabalho. Quanto a Maldonado, é um departamento com grande atração de turistas nacionais e internacionais, devido às suas praias de renome internacional, que demandam mão de obra para o setor de serviços e, especificamente, para o turismo. Os venezuelanos também vivem em outros departamentos, embora em menor escala, como San José, que também faz parte da área metropolitana de Montevidéu; Lavalleja, próximo a Maldonado e Canelones; e Rivera, na fronteira com o Brasil; e Rivera, na fronteira com o Brasil, e um dos principais pontos de entrada de migrantes venezuelanos, principalmente durante a pandemia de Covid-19; Salto e Colonia, na fronteira com a Argentina, outro importante ponto de entrada de venezuelanos e migrantes de outras origens; Soriano, na vizinha Canelones; e Treinta y Tres, na fronteira com Lavalleja.



Magalhães da Universidade Católica do Uruguai³⁰.

De acordo com os dados de ambas as pesquisas, existe um predomínio da migração feminina no caso venezuelano. As mulheres representam o 56% de migrantes venezuelanos no Uruguai. É possível, portanto, falar de um forte componente de feminização desse contingente migratório.

Em termos de distribuição etária, há um predomínio de pessoas entre os 26 e 35 anos, onde é maior, e entre os 36 e 45 anos (ECH 2012-2019; Pesquisa realizada para a investigação da Cátedra Magalhães entre 2018 e 2020). Esta informação revela como a população venezuelana que chega ao Uruguai está dentro das faixas etárias adequadas para serem incorporadas às fontes de trabalho nacional e, no caso das mulheres, estão em idades férteis. Este último dado é de relevância para um país que se caracteriza por ter uma baixa taxa de natalidade e uma taxa de fertilidade total de 1,6 filhos por mulher, sendo ao mesmo tempo, o mais envelhecido de Latino America (INE 2020). Além disso, as informações fornecidas pela ECH (2012-2019) destacam também uma importante percentagem de população com menor de 18 anos de idade, cuja incidência é significativa para um país como o Uruguai onde a população com menos idade não representa o 30% da população total (INE 2020).

Nível de educação

Esta variável permite conhecer o nível de qualificação dos migrantes venezuelanos e, ao mesmo tempo, saber si apresentam competências necessárias para os empregos aos que têm acesso. É notável a elevada percentagem de venezuelanos, tanto homens como mulheres, que concluíram a formação universitária: quase 60% em média, e inclusive pós-graduações, perto do 10%, bem acima da média da população uruguaia, que alcança apenas o 12,3% (ECH 2012-2019; Pesquisa realizada para a investigação da Cátedra Magalhães entre 2018 e 2020). Se analisarmos os dados separadamente entre homens e mulheres é possível observar uma maior percentagem destas últimas com diplomas universitários tanto de graduação como de pós-graduação.

30 Pesquisa realizada usando a modalidade de pesquisa face a face e autoadministrada. Amostragem: população de sementes. Data de implementação: de abril de 2019 a fevereiro de 2020. Análise estatística: SPSS. Número total de respostas obtidas: 121.



Categorias e setores de trabalho ocupados por cidadãos venezuelanos

Em primeiro lugar, é notável o elevado nível de emprego dos trabalhadores venezuelanos no mercado de trabalho uruguaio, pelo menos até pouco antes do início da emergência sanitária. De acordo com as informações fornecidas pela ECH (201-2019), existe uma taxa média de emprego do 90% entre homens e mulheres, nas idades compreendidas entre os 18 e 64 anos, em comparação com um pouco superior a 60% da população nacional. Por que é que a população venezuelana tinha um nível de emprego mais elevado do que a população uruguaia antes da crise sanitária? Uma resposta poderia vir acompanhada da teoria da segmentação laboral de Doeringer e Piore (1971). Certas atividades do setor econômico e dos serviços, junto com as do transporte e do serviço doméstico e do cuidado de doentes e idosos, começaram a ser rejeitadas pela mão de obra uruguaia devido aos baixos níveis salariais que apresentam, e os migrantes, em especial os cidadãos venezuelanos, com um alto nível de qualificação e de certas habilidades transversais perdidas pelos trabalhadores nacionais, começaram a preencher esses empregos (Juan Mailhos, assessor da Câmara Nacional de Comércio e Serviços, 2019)³¹.

Estes números relativos à ocupação laboral têm mudado com a situação atual de emergência sanitária, apesar de que o Uruguai continua garantindo o acesso aos serviços básicos –especialmente à saúde e à educação– independentemente da nacionalidade e do acesso ao mercado de trabalho. Apesar disso, os venezuelanos têm sido os mais afetados pela atual crise, de acordo com os resultados da atualização da Displacement Tracking Matrix (DTM) (Matriz de Acompanhamento de Deslocações)- uma ferramenta que utiliza a Organização das Nações Unidas para determinar as características de uma população deslocada. A DTM (2020-21) mostra que o 19% dos cidadãos da Venezuela inquiridos no Uruguai estão atualmente desempregados, o 17% dos que trabalham o fazem informalmente, o 24% dizem que seus ingressos não são o suficiente como para cobrir as necessidades básicas, e o 11% vive em pensões sobrelotadas ou em casas alugadas. Apesar disso, essa ferramenta revela também como o acesso aos cuidados de

31 Juan Mailhos. Gerente Jurídico da Câmara Nacional de Comércio e Serviços do Uruguai. Entrevista realizada em novembro de 2019 por Silvia Facal.



saúde está garantido -47% fundo mutualista, 42% prestador público e 1% seguro privado-, e os que ainda não tiveram acesso, devido à sua recente entrada ao país, estão em um processo de regulação de seu estatuto migratório.

Até antes da crise sanitária, o Uruguai tinha um índice elevado de emprego no contexto de um mercado de trabalho segmentado, *bimodal ou dual*, (Facal,2020) com a necessidade da mão-de-obra qualificada e não qualificada nos setores formal e informal da economia. Quando a mão-de-obra nacional não consegue satisfazer essas necessidades, de acordo com a teoria de Doeringer e Piore (1971), surge uma mão-de-obra alternativa, como a dos venezuelanos, desejosa por aceder aos postos de trabalho vagos.

O nível de acesso às categorias e setores de emprego no Uruguai por parte dos trabalhadores da Venezuela, de acordo com os dados acumulados do período 2012 ao 2019 da ECH (2012-2019), vai de mãos dadas com uma ocupação, tanto para homens como para mulheres, na categoria de empregado privado, seguida da categoria de trabalhador independente com instalações.

No que diz respeito à distribuição dos venezuelanos de acordo com o setor de atividade reflita na Tabela 2, é possível observar um predomínio, a nível geral, de trabalhadores na categoria de comércio, restaurante e hotéis, seguidos dos que trabalham em serviços comunitários, sociais e pessoais.

Tabela 2.
Distribuição dos trabalhadores venezuelanos empregados por setor de atividade econômica, por sexo

Sector de atividade econômica da Venezuela	Total	Homens	Mulheres
Agricultura e mineração	-	-	1
Indústrias transformadoras	11	14	8
Eletricidade, gás e água	-	-	1
Construção civil	2	4	1
Comércio, restaurantes e hotelaria	39	36	41,5
Transportes e comunicações	13	19	5,5
Serviços comunitários, sociais e pessoais	34	27	42
Total	100	100	100

Fonte: Elaboração própria com dados da ECH, 2012-2019.



O setor dos serviços também inclui àqueles que realizam tarefas de entrega (*delivery*), principalmente homens. Se considerarmos novamente o nível de qualificação dos trabalhadores venezuelanos e os funções que desempenham, se observa um alto índice de sobre qualificação. É mais elevado entre as mulheres, atingindo 26% (ECH 2012-2019), em comparação do 5% entre as mulheres nativas não migrantes (Facal, 2020).

Por sua vez, o nível salarial é um fator importante a levar em conta quando se trata de conhecer com maior profundidade tudo o que está relacionado com a inclusão dos trabalhadores venezuelanos no mercado de trabalho uruguaio. De acordo com dados da ECH (2012-2019), o 71% dos venezuelanos mensalmente ganham menos de 30.000 pesos uruguaios (menos de 750 dólares americanos) em um país onde o salário médio dos trabalhadores uruguaios é de 30.312 pesos uruguaios (PwC, 2019) e a cesta familiar do índice de preços ao consumidor (IPC)³² é de 83.178 pesos uruguaios (uns 2.060 dólares americanos)

Quanto ao salário recebido, dependendo do gênero dos trabalhadores, também se observam importantes diferenças: há paridade entre aqueles que ganham menos de 30.000 pesos uruguaios. Por outro lado, quando o salário aumenta, há diferenças: na faixa salarial entre 30.001 e 50.000 (750 a 1250 dólares americanos), a percentagem de homens é maior do que a de mulheres devido ao tipo de atividade realizada, onde os salários percebidos pelas mulheres são mais baixos, por outro lado, acima de 50.001 se produz uma ligeira diferença em favor das mulheres, relacionada com o predomínio de cargos de responsabilidade exercidos por elas. Os salários nomeados expõem também importantes carências em termos de rendimento, o que leva aos trabalhadores de origem venezuelano, como também ocorre com os uruguaios, a aumentar as horas de trabalho e assumir múltiplos empregos, quer dizer que, precisam ter mais do que um emprego para cobrir as suas despesas mensais. De acordo com o Monitor do Mercado de Trabalho (2019), e considerando apenas aos trabalhadores do setor privado, onde predominam os venezuelanos, devido a seu baixo acesso ao setor público, a taxa de precariedade e de múltiplos empregos aumentaram desde 2015. Os resultados da pesquisa realizada no âmbito da Cátedra Magalhães mostram resultados

32 Refere-se a um grupo familiar representativo com duas pessoas de renda média em Montevideu, o que corresponde a um tamanho médio de família de 3,3 pessoas por domicílio, com duas delas recebendo renda.



semelhantes, destacando a importante inclusão dos trabalhadores venezuelanos no setor dos serviços tanto em homens como em mulheres. Estas últimas se destacam no serviço de acompanhante a doentes e idosos; serviço doméstico; atenção ao público em comércios em vendas a retalho e por grosso; atendimento em *call-center*, faxineiras em hotéis, etc.

Uma vez que os trabalhadores venezuelanos, tanto homens como mulheres, residem no país há mais tempo, há uma maior inclusão em empregos mais qualificados devido a diferentes circunstâncias, como o reconhecimento das suas qualificações ou a sua experiência de trabalho no país de acolhimento. Entre os empregos altamente qualificados, destacam-se, por exemplo, os ligados à tecnologia, com uma taxa de desemprego de 0% no Uruguai

Foi referido anteriormente que os trabalhadores venezuelanos foram os mais prejudicados em termos de permanência no emprego durante a crise sanitária da Covid-19 e, entre eles, as mulheres. Isto deve-se principalmente ao fato de, antes da crise, se encontravam ocupando os setores vinculados aos serviços e em concreto aqueles mais afetados pela crise, como o comércio e o turismo. No que diz respeito às mulheres, segundo dados do DTM (2020-21), elas representam 65% dos venezuelanos que passaram a estar desempregados. Centrando-nos também na maior precariedade laboral entre as mulheres, se destaca também, como elas são mais susceptíveis de serem traficadas para fins de exploração sexual devido a sua maior vulnerabilidade no acesso ao emprego (Sandra Perroni, 2021³³). Por essa razão, aumentou a preocupação pela situação das mulheres venezuelanas entre as autoridades governamentais, departamentais e das ONG dedicadas a dar apoio a estas migrantes.

33 Sandra Perroni. Integrante de El Paso em colaboração com o Instituto Nacional de Mulheres do Ministério de Desenvolvimento Social. Entrevista realizada em abril de 2021 por Silvia Facal.



Conclusões

Os migrantes venezuelanos, considerados como refugiados pela OIM e pelo ACNUR que chegaram ao Uruguai, a partir de 2013, em resposta à crise vivida em seu país de origem, apresentam um ligeiro grau de feminização, e ao mesmo tempo, um alto índice de qualificação que não foi suficientemente aproveitado. Até 2019, a inclusão dos venezuelanos no mercado de trabalho mostrava cifras superiores à apresentada pela população nacional. Mas, como no início da crise sanitária, os venezuelanos, e em maior proporção as mulheres, foram fortemente prejudicados em seu acesso ao mercado de trabalho. Apesar dos efeitos da atual crise sanitária, continua se produzindo a entrada ao país de venezuelanos utilizando o mecanismo de “razões humanitárias” para solicitar a entrada, aumentando assim o número de refugiados.



Bibliografía

ACNUR (2021): Situación en Venezuela. Disponible en: <https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html>

Castillo Crasto, T y Reguant Álvarez, M. (2017). Percepciones sobre la migración venezolana: causas, España como destino, expectativas de retorno. En: *Migraciones* 41. 133-163.

DNM (2020 y 2021): Estadísticas de pasajeros ingresados y egresado (2008-2020). Montevideo: Estadísticas de la Dirección Nacional de Migración.

DTM (Displacement Tracking Matrix) (2020-2021). OIM. Disponible en: <https://dtm.iom.int/>

Doeringer, P. y Piore, M.J. (1985) [1971]: Mercados internos de trabajo y análisis laboral, Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Encuestas Continuas de Hogares (2012-2019): Montevideo: Instituto Nacional de Estadística.

Facal, Silvia (2020): "Intégration sur le marché du travail des immigrants récents en Uruguay (2008-2016)". En: Le Moing, A., Ouaked, S. & Le Bihan-Colleran, C. (dir.): *Les défis de la diversité culturelle dans le monde du travail au XXI^e siècle. Politiques, pratiques et représentations en Europe et dans les Amériques*, Bruxelles, Peter Lang, pp. 125-141

INE (2020): Anuario Estadístico Nacional. 2019. Montevideo: INE.

Junta Nacional de Migración (2014-2020): Informe de residencias Mercosul. Montevideo: MRREE.

Ley 18.250 (2008). Ley de Migración. Disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18250/2008>



Ley 19.254 (2014). Modificación a la Ley de Migraciones 18250. Obtención de residencia permanente a familiares de nacionales de los estados parte y asociaciones del Mercosur. Disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19254/2014>

Monitor del Mercado Laboral (2019): Montevideo: Observatorio de Seguridad Social.

Páez, T. (2015): La voz de la diáspora venezolana. Madrid: Catarata.

PwC (2019): Encuesta sobre las remuneraciones y los beneficios que 109 empresas les dieron a sus colaboradores en 2018. Montevideo: PwC.

